

## PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL CORREDOR SANTA CRUZ-PUERTO SUÁREZ

(BO-0033)

### RESUMEN EJECUTIVO

<b>Prestatario:</b>	República de Bolivia		
<b>Agencia ejecutora:</b>	Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación - MDSP		
<b>Monto y fuente:</b>	BID (FOE):	US\$	21,0 millones
	Cofinanciamiento (F. Nórdico):	US\$	3,0 millones
	Local:	US\$	2,5 millones
	Total:	US\$	26,5 millones
<b>Términos y condiciones:</b>	Plazo Amortización:	40	Años
	Período de Gracia:	10	Años
	Desembolso y Ejecución:	10 <sup>1</sup>	Años
	Tasa de Interés:	1%	10 primeros años
		2%	30 últimos años
	Inspección y vigilancia:	1%	
	Comisión de crédito:	0,5%	
	Moneda:	Las que formen parte del FOE	
<b>Objetivos:</b>	El objetivo del Proyecto es minimizar, controlar, contrarrestar y compensar los impactos socio-ambientales directos, indirectos, cumulativos, de largo plazo o sinérgicos que serán provocados por la implantación y operación del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suárez, promoviendo la conservación ambiental y un proceso de desarrollo económico y social sostenible en el área de influencia, de acuerdo con la legislación boliviana y las normas del Banco en la materia.		
<b>Descripción:</b>	El Proyecto consiste en: (i) la mitigación de los impactos indirectos del proyecto vial, por medio del saneamiento y titulación de las tierras del Área de Influencia Directa (AID) del Corredor Vial, de importantes acciones de apoyo a las comunidades indígenas, a las áreas protegidas y bosques, y el fortalecimiento institucional y promoción del desarrollo municipal de los seis municipios del AID, incorporando acciones de interacción con el público involucrado o interesado en el		

<sup>1</sup> (Ver Sección I, ¶3.87 y 3.88)

desarrollo tanto del proyecto vial como del proyecto de conservación ambiental, y en (ii) la mitigación de los impactos directos, a través de la reposición de las pérdidas causadas por la liberación del derecho de vía y de la protección del patrimonio arqueológico y cultural, así como de la divulgación de informaciones sobre la obra y establecimiento de canales de diálogo con los actores locales. El Proyecto también prevé acciones de supervisión y fiscalización ambiental para las actividades de las obras, y auditorías periódicas para garantizar la ejecución de las acciones previstas en forma ambientalmente correcta.

**Estrategia del  
Banco en el país y  
sector:**

La estrategia del Banco en Bolivia, definida en el Documento de País (GN-2020) aprobado por el Directorio el 9 de junio de 1999, tiene como objetivo central la lucha contra la pobreza y propone tres líneas de acción consistentes con tres de los cuatro pilares del Plan Operativo de Acción del Gobierno 1997-2002: (i) crecimiento económico y la creación de oportunidades (pilar oportunidad); (ii) desarrollo del capital humano y acceso a los servicios sociales básicos (pilar equidad); y (iii) gobernabilidad y consolidación de las reformas (pilar institucionalidad).

El Proyecto propuesto atiende a los tres lineamientos estratégicos propuestos por el Banco para el país para fomentar el crecimiento económico y la creación de oportunidades en forma sostenible, la promoción de una mayor equidad social y la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales, al tiempo que se estimula la participación comunitaria en el desarrollo de los programas, así como su capacitación para participar mejor en el juego político democrático. A su vez, los mecanismos de gestión ayudarán a consolidar las reformas a través de la descentralización.

Además el Proyecto propuesto es consistente con la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) al garantizar la seguridad jurídica de acceso, tenencia o aprovechamiento de activos, la modernización del catastro urbano, promoción la de políticas y acciones orientadas a mejorar las oportunidades de las mujeres, el fortalecimiento institucional de los ejecutores y co-ejecutores, y la ampliación de las oportunidades de participación económica fortaleciendo las organizaciones indígenas.

**Revisión social y  
ambiental:**

Se trata de un proyecto ambiental para la mitigación de los impactos socio-ambientales directos y indirectos generados por la implementación del Proyecto Vial. Diversos estudios ambientales, de creciente profundidad, fueron realizados durante la preparación del proyecto vial y del presente Proyecto: (i) un primer Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), elaborado conjuntamente con los estudios de ingeniería de la carretera; (ii) una

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la revisión y complementación del EEIA anterior; (iii) un estudio especial del Sistema de Regulación de Tenencia de Tierras; (iv) el Plan Operativo que detalla las acciones del Proyecto; (v) un Informe de un Panel Asesor de Alto Nivel; y (vi) un nuevo EEIA, sobre la base del diseño final de la carretera, presentado por un consorcio privado. La estrategia de conservación adoptada actuará en varios frentes; (i) clarificando los derechos de propiedad sobre la tierra y retornando al Estado grandes extensiones de tierras fiscales aptas para el manejo forestal; (ii) ordenando la ocupación del territorio; (iii) fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas, especialmente las tareas de protección; (iv) fortaleciendo la fiscalización de bosques y controlando el desmonte ilegal; y (v) promoviendo prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Las versiones integrales de la Evaluación Ambiental Estratégica y la Revisión de la EEIA están disponibles en el sitio del Banco en INTERNET desde el 4 de agosto de 2000. Ver: <http://www.iadb.org/regions/re1/eia/bo0036/index.htm>. El Informe de Proyecto fue enviado al “Public Information Center” (PIC) el 4 de marzo de 2002, y aprobado por el CESI el 19 de febrero del 2002

**Beneficios:**

Tratándose de un proyecto ambiental es evidente que sus acciones traerán beneficios al medio ambiente, en comparación con la hipótesis de su no-ejecución. Los beneficios esperados son: (i) la mejora en la administración de derechos de propiedad predial y regulación sobre uso de suelos; (ii) mayor seguridad jurídica que brindará incentivos para un uso más sostenible del recurso suelo, asegurando asimismo el derecho propietario sobre la tierra a campesinos e indígenas; (iii) una mejora en los sistemas de registro y catastro que permitirá mayor efectividad en la recaudación del impuesto predial; (iv) retorno al Estado de grandes extensiones de tierras fiscales aptas para manejo forestal; (v) ordenamiento de la ocupación del territorio; (vi) fortalecimiento de la fiscalización de bosques y control del desmonte ilegal; (vii) fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas; (viii) promoción de prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; (ix) capacitación a los gobiernos municipales para que puedan lidiar mejor con las nuevas demandas sociales y responsabilidades; (x) capacitación a las organizaciones sociales para mejorar la calidad de la participación ciudadana; (xi) promoción de la conservación del patrimonio arqueológico y cultural; y (xii) reposición de las pérdidas a los directamente afectados por el Proyecto Vial, en calidad superior a la condición presente.

**Riesgos:**

Los principales riesgos del Proyecto son: (i) la escasa capacidad institucional de los organismos públicos y privados ejecutores y

co-ejecutores de las acciones del Proyecto. Este riesgo se minimizará con acciones específicas de fortalecimiento institucional; (ii) falta de interés en la ejecución del Proyecto por el próximo gobierno. Este riesgo será minimizado estableciendo cláusulas en el contrato de préstamo del Proyecto Vial, condicionando los desembolsos de tal Proyecto al cumplimiento de metas de avance en el presente Proyecto; (iii) riesgos de que ocurran incidentes sociales o ambientales de gran repercusión internacional. Este riesgo está siendo minimizado estableciendo mecanismos de prevención y resolución de conflictos antes de que alcancen mayores proporciones; (iv) riesgo de que ocurran modificaciones en el marco legal que puedan generar conflictos con los objetivos del Proyecto. Este riesgo será minimizado dado que los compromisos contractuales preceden posibles cambios en la legislación; (v) riesgo de inestabilidad institucional con cambios en los principales organismos ejecutores. El establecimiento de metas en los programas, ligados a desembolsos, disminuye este riesgo; (vi) riesgo de que no se lleve a cabo o se postergue el proyecto vial y que el derecho de vía que haya sido titulado como tierra fiscal sea nuevamente ocupado por invasores.

**Condiciones contractuales especiales:**

Además de las condiciones contractuales estándares previas al primer desembolso, se establecerán las siguientes **condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso:**

- 1) Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) creada y en funcionamiento;
- 2) evidencia de que han entrado en vigencia los convenios entre el Organismo Ejecutor y las siguientes entidades, en virtud de los cuales el Organismo Ejecutor se compromete a transferir los recursos del Proyecto a dichas entidades y éstas se comprometen a utilizar dichos recursos para la ejecución de las actividades bajo su responsabilidad, de conformidad con lo acordado con el Banco en el Contrato de Préstamo:
  - i) con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Consejo de la Judicatura, para la ejecución del Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras ;
  - ii) con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Forestal Trópico Húmedo (FDTA-TH) para la ejecución del Subprograma de Iniciativas Productivas;
  - iii) con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para la ejecución de parte del Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas;
  - iv) con la Superintendencia Forestal para la ejecución de parte del Subprograma Conservación de Bosques;

- v) con la Fundación Trópico Húmedo, para la ejecución del Subprograma Proyectos Demostrativos;
  - vi) con el Servicio Nacional de Caminos (SNC), INRA y la Prefectura de Santa Cruz (PSC), para el Programa de Reposición de Pérdidas;
  - vii) con el SNC y el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, para la ejecución del Programa de Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural ; y
  - viii) con el SNC para la ejecución del Programa de Información e Interacción Social y de las actividades de Supervisión Ambiental; y
- 3) evidencia de que, en los términos acordados con el Banco, se ha formalizado la creación del Comité de Coordinación y Seguimiento y del Comité de Participación y Consulta (CPC), incluyendo este último la Subcomisión de Tierras (§ 3.20 a 3.24);
  - 4) evidencia de que ha entrado en vigencia la Resolución del Directorio del SNC, en virtud de la cual se establecen pautas en materia ambiental, congruentes con el Plan Operativo del Proyecto, que deberán aplicarse para la construcción de todas las obras del corredor.( § 2.32)
  - 5) presentación a satisfacción del Banco del Plan Operativo del Proyecto actualizado.

**Condiciones previas al desembolso del equivalente de US\$ 1.600.000 de los recursos del Financiamiento asignados al Subprograma de Desarrollo Organizativo Indígena, para la constitución del Fondo de Fideicomiso para el Fortalecimiento de las Centrales Indígenas:** Además del cumplimiento de las condiciones estándares y especiales previas al primer desembolso del financiamiento y del cumplimiento con la condición de la entrada en vigencia de los contratos de gestión a que se refiere la sección **Otras Condiciones Contractuales Especiales** de este Resumen, presentación de evidencia que se ha suscrito el contrato de la constitución del Fondo de Fideicomiso para el Fortalecimiento de las Centrales Indígenas. (§2.10, 2.11, 3.41).

**Condiciones previas al desembolso del equivalente de US\$ 1.970.000 de los recursos del financiamiento asignados al Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas, para la constitución del Fondo de Fideicomiso para apoyar el Manejo de Áreas Protegidas:** Además del cumplimiento de las

condiciones estándares y especiales previas al primer desembolso del financiamiento y del cumplimiento con la condición de la entrada en vigencia de los contratos de gestión a que se refiere la sección **Otras Condiciones Contractuales Especiales** de este Resumen, evidencia que se ha suscrito el contrato de la constitución del Fondo de Fideicomiso para apoyar el Manejo de Áreas Protegidas (§2.18, 3.43).

**Condiciones previas al desembolso del equivalente de US\$ 1.500.000 de los recursos del financiamiento asignados al Subprograma de Conservación de Bosques, para la constitución del Fondo de Fideicomiso para la Conservación de Bosques:** Además del cumplimiento de las condiciones estándares y especiales previas al primer desembolso del financiamiento y del cumplimiento con la condición de la entrada en vigencia de los contratos de gestión a que se refiere la sección **Otras Condiciones Contractuales Especiales** de este Resumen, evidencia que se ha suscrito el contrato de la constitución del Fondo de Fideicomiso para la Conservación de Bosques (§2.19, 3.45).

**Condiciones para las Entidades Coejecutoras Principales, entidad beneficiaria coejecutora, entidades beneficiarias y entidades administradoras de los Fondos de Fideicomiso participantes en el Proyecto.**

- a) En los convenios y contratos de gestión que el Organismo Ejecutor suscriba bajo este Proyecto deberá incluirse, entre otras condiciones y, según corresponda, las siguientes:
  - (i). Las organizaciones o centrales de comunidades indígenas participantes del Proyecto podrán recibir bienes y servicios provenientes de recursos del Proyecto, toda vez que presenten previamente al Organismo Ejecutor y, por intermedio de éste, al Banco, evidencia de que cuentan con personería jurídica;
  - (ii). El compromiso de las Entidades Coejecutoras Principales, de la Entidad Beneficiaria Coejecutora y de las Entidades Beneficiarias, según corresponda, de que los bienes y servicios que se financien con recursos del Proyecto se utilizarán exclusivamente en la ejecución del Programa, Subprograma o actividad respectiva;
  - (iii). El derecho del Prestatario, del Organismo Ejecutor y del Banco, de ser pertinente, a examinar los bienes, los lugares, los trabajos y las construcciones del Programa,

Subprograma o actividad respectiva;

- (iv). La obligación de proporcionar todos los informes e informaciones que el Prestatario, el Organismo Ejecutor y la entidad administradora de Fondo de Fideicomiso, de ser pertinente, razonablemente soliciten a la Entidad Coejecutora Principal, la Entidad Beneficiaria Coejecutora o las Entidades Beneficiarias, según corresponda, con relación al Programa, Subprograma o actividad que se ejecuta. La información que se proporcionará a las entidades administradoras de los Fondos de Fideicomiso será en el marco de los contratos de gestión suscritos;
- (v). Prestar rendición de cuentas al Organismo Ejecutor de los recursos recibidos y preparar los informes financieros que les sean solicitado; y mantener sistemas de controles internos contables y administrativos separados para el manejo de los recursos del Proyecto.
- (vi). Mantener debidamente archivada la documentación comprobatoria de contrataciones y gastos efectuados con recursos del Financiamiento y de la contrapartida y disponible para análisis de los auditores externos y/o personal del Banco;
- (vii). Mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos del Financiamiento y de la contrapartida local;
- (viii). El derecho del Organismo Ejecutor a suspender los desembolsos si la Entidad Coejecutora Principal, la entidad beneficiaria coejecutora o las entidades beneficiarias, según corresponda, no cumplen con las obligaciones que asumieren bajo este Proyecto;
- (ix). Los procedimientos para la adquisición de bienes, ejecución de obras y contratación de servicios, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo;
- (x). La obligación de las entidades administradoras de los Fondos de Fideicomiso de proporcionar informes e información al Organismo Ejecutor, al Banco y a las Entidades Coejecutoras Principales cuando éstas se lo soliciten; y

- (xi). La obligación de la UEP de transferir los recursos a los beneficiarios se cumplirá de acuerdo a los POA y en cumplimiento de una modalidad específica, que asegure tanto la transparencia de la transferencia de los recursos como el buen uso de los mismos. Dicha modalidad será establecida en los respectivos contratos de gestión.
- b) Adicionalmente, en los contratos de gestión de los Fondos de Fideicomiso de los Subprogramas de Desarrollo Organizativo, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques , deberán incluirse: (i) los términos y condiciones previamente acordados con el Banco al respecto; (ii) la presentación de los POAs, informes y auditorías requeridos por el Organismo Ejecutor y el Banco; (iii) las sanciones a que se refiere el párrafo 3.67 de este Documento; (iv) la estructura y mecanismo de ejecución de los Fondos de Fideicomiso; y (v) la obligación de que todo remanente de recursos en los Fondos de Fideicomisos, a la fecha de terminación de los mismos, deberá ser devuelto al Prestatario. Esta obligación deberá también ser incluida en el Contrato de Fideicomiso.

**Otras condiciones contractuales especiales:** El Prestatario se compromete a presentar, a satisfacción del Banco, lo siguiente:

- (a) dentro del plazo de ocho (8) meses, contado a partir de la vigencia de este Contrato de Préstamo, los borradores de los contratos de gestión y de Fideicomiso a que se refieren la Segunda Condición (ii) abajo y párrafos 3.41, 3.43, y 3.45 este Documento, respectivamente; y
- (b) dentro del plazo de nueve (9) meses, contado a partir de la vigencia de este Contrato de Préstamo, evidencia de lo siguiente:
  - (i) que ha entrado en vigencia el contrato de cofinanciamiento paralelo entre el Fondo Nórdico de Desarrollo y la República de Bolivia para el financiamiento parcial de la contrapartida local del Proyecto;
  - (ii) que han entrado en vigencia los siguientes Contratos de Gestión entre el Organismo Ejecutor y las siguientes entidades, los que incluirán, entre otros temas, los acordados previamente con el Banco: (1) con el Fondo Indígena, para la ejecución de las actividades financiadas por el Fondo de Fideicomiso para el Fortalecimiento de las Centrales Indígenas; (2) con SERNAP y FUNDESNAF,



para la ejecución de las actividades financiadas por el Fondo de Fideicomiso para Apoyar el Manejo de Áreas Protegidas; y (3) con la Superintendencia Forestal y la Fundación PUMA, para la ejecución de las actividades financiadas por el Fondo de Fideicomiso para apoyar la Conservación de Bosques (en su conjunto denominados “Contratos de Gestión”); y

(iii) que ha entrado en vigencia el convenio entre el Organismo Ejecutor y la CPESC, las organizaciones indígenas de OICH, CCICH, CICOL, CIRPAS, CANOB y CABI, y las organizaciones indígenas CICHIPA, CICHAR y CICHGB, en virtud del cual éstas recibirán bienes y servicios provenientes de recursos asignados a los Subprogramas de Desarrollo Organizativo y de Iniciativas Productivas, y adicionalmente, en el caso de CPESC, servicios provenientes de recursos del Subprograma de Planes de Manejo de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).

(c) Durante el período de ejecución del Proyecto, se presentarán los informes trimestrales, semestrales y anuales, los Planes Operativos Anuales (POA), y los estados financieros (a que se refieren los párrafos 3.61, 3.80, 3.62 y 3.65 de este documento). Así mismo se llevarán a cabo las reuniones a que se refieren los párrafos 3.64 y 3.65. Para la presentación al Banco de estos informes, POAs y estados financieros del Proyecto, se establece que, en su preparación, estos deberán tomar en consideración el plazo de ejecución específico de cada Programa, Subprograma y actividad del Proyecto.

**Clasificación de la equidad social y de la pobreza:**

Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos clave para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704) (véase ¶1.59 a 1.61). Esta operación no califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI). El prestatario no utilizará el 10 % del financiamiento adicional

**Excepciones a las políticas del Banco:**

Este Proyecto propone plazos de ejecución y desembolsos de 10 años contados a partir de la fecha de vigencia del Contrato de Préstamo, con el objeto de permitir, durante este plazo, la ejecución de los Subprogramas de Desarrollo Organizativo, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques y los desembolsos para actividades relacionadas con el control y supervisión de la utilización de los recursos desembolsados para dichos Subprogramas. Estos plazos de ejecución y desembolsos se

alejan de las políticas del Banco en materia de la duración de proyectos específicos y préstamos globales tradicionales (GN-750-1, párr. 1.05 (a) y 2.08 (a) y GN-2085-2, Sección III.B). Asimismo, para la ejecución de estos Subprogramas, se propone que: (a) el plazo de ejecución anteriormente indicado, se aplique también a los Fondos de Fideicomiso que se constituirían para financiar los tres Subprogramas; y (b) se efectúen desembolsos, en una sola vez, de casi la totalidad del monto de los recursos asignados a estos Subprogramas; se utilicen los intereses devengados por dichos recursos para la ejecución de los Subprogramas; y el plazo para la justificación de la utilización de la totalidad de estos desembolsos sea también de 10 años.

**Adquisiciones:**

Se aplicarán los procedimientos estándares del Banco para la adquisición de bienes, y para la ejecución de obras del Proyecto. Se recurrirá a procedimientos de licitación pública internacional cuando se utilicen los recursos del financiamiento del Banco para la adquisición de bienes cuyo valor sea igual o superior al equivalente de US\$ 350.000 y la contratación de obras cuyo valor sea igual o superior al equivalente de US\$ 3.000.000.

Cabe señalar que la Fundación Trópico Húmedo estará sujeta a los procedimientos estándares del Banco para adquisición de bienes y ejecución de obras aplicables a instituciones del sector público. Esta entidad estará también sujeta a la legislación local aplicable al sector público, para los casos de adquisición de bienes y ejecución de obras por debajo de los montos arriba mencionados, para los que la política del Banco requiere licitación pública internacional. El Prestatario se comprometerá a fiscalizar a esta entidad, por intermedio del Organismo Ejecutor, como si fuera institución del sector público, en lo relativo a la utilización de los procedimientos y de la legislación indicados en este párrafo.

La adquisición de servicios de consultoría se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos estándares del Banco para estos propósitos y los procedimientos indicados en el Documento GN-1679-3. Se utilizará concurso público internacional para la adquisición de servicios de consultoría cuyo valor sea igual o superior a US\$ 200.000. Para este Proyecto, en los casos de Selección Basada en la Calidad y en el Costo para firmas consultoras, el peso relativo del precio como criterio de evaluación no superaría el 20% y el elemento técnico o de calidad de oferta no podría ser menor al 80%.

## **I. MARCO DE REFERENCIA**

### **A. El Corredor de Transporte Santa Cruz – Puerto Suárez**

- 1.1 El Departamento de Santa Cruz tiene un importante potencial agropecuario e industrial, que puede permitir diversificar la base económica de Bolivia, crear nuevos polos de desarrollo y generar mayores oportunidades de empleo. De hecho, durante la última década, la población de este departamento aumentó a un ritmo mayor que la media nacional, su área cultivada se expandió en forma notable y es el departamento que dio el mayor aporte al PBI. Actualmente, su producción agrícola equivale a más de la mitad de la producción agrícola total del país.
- 1.2 Además de la importancia directa para la economía local, la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez forma parte de uno de los corredores de integración que permiten la vinculación de Bolivia con el MERCOSUR, especialmente Brasil y Paraguay y, por medio de la hidrovía Paraná – Paraguay, con Argentina, Uruguay y los mercados de Europa y América del Norte. Ese eje de cerca de 600 km, entre la ciudad de Santa Cruz y la frontera con Brasil (junto a la ciudad brasileña de Corumbá), está conectado por ferrocarril y por un camino en pésimo estado, que se torna intransitable durante la época de lluvias.
- 1.3 En lo que respecta al ferrocarril, la condición de virtual monopolio que disfruta la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO), y las deficiencias de infraestructura del sistema determinan fletes caros y un servicio poco eficiente. Las inversiones realizadas por la EFO después de una reciente capitalización han mejorado la situación, pero de hecho sólo las grandes cargas a granel integradas a sistemas de logística (básicamente soya), se han beneficiado. La mayor parte de los actores económicos locales paga un precio elevado por un servicio de baja calidad.
- 1.4 En lo que se refiere a la carretera, el actual estado de la misma tiene un impacto considerable en los elevados costos de transporte de personas y bienes, y hace que durante la época de lluvias la región quede totalmente aislada (parcialmente durante el resto del año). Es por esta razón que el mejoramiento de dicha carretera tiene una alta prioridad dentro de los planes de desarrollo del Gobierno Nacional.
- 1.5 El mejoramiento de la carretera traerá como resultado: (i) la expansión territorial, la intensificación y diversificación de la producción agropecuaria, y el crecimiento de la agroindustria de exportación; (ii) la explotación forestal y la industrialización y exportación de productos maderables; (iii) la explotación de minerales calcáreos y fabricación de cemento (ya en producción, pero sin transporte confiable hacia Santa Cruz y lugares intermedios); (iv) la operación de la zona franca que se ha creado en Puerto Suárez; y (v) la mayor utilización de las instalaciones turísticas existentes en la región de Puerto Suárez y otras que podrían desarrollarse alrededor de lugares considerados por la UNESCO como parte del patrimonio cultural de la humanidad.
- 1.6 El transporte carretero, que tiene flexibilidad para adaptarse a múltiples escalas y variadas demandas, permitirá implementar la actividad económica regional, interconectar miles de pequeños productores y consumidores distribuidos por el

territorio, y establecer un mercado eficiente. Para eso falta la espina dorsal, una carretera habilitada a lo largo de todo el Corredor, transitable todo el año, que ofrezca un nivel de servicio adecuado al volumen de tráfico proyectado.

- 1.7 El Gobierno de Bolivia (GdB) ha solicitado el apoyo del Banco para financiar parcialmente las obras de mejoramiento de la Carretera Santa Cruz – Puerto Suárez (BO-0036), que comprende el mejoramiento / implantación de 570 km de carretera, entre Pailón (Paraíso) y Puerto Suárez, conectando con tramos ya asfaltados en ambos extremos, y la posterior operación y mantenimiento de la carretera en régimen de concesión. A tal efecto, el Banco financió un Estudio de Factibilidad para todo el Corredor, el diseño final para el tramo Pailón – San José (210 km), y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), contratados por el SNC.
- 1.8 El Gobierno de Bolivia (GdB) ha decidido ejecutar la carretera por tramos, integralmente pavimentada, asegurando la transitabilidad permanente durante la construcción. Los costos directos de construcción, del orden de US\$ 331 millones, serían financiados por el BID, Unión Europea, CAF y otros. Considerando la ausencia de recursos concesionales para financiar la construcción de la carretera en una única etapa, la operación BO-0036 sería estructurada en dos fases, con un monto de préstamo del Banco de US\$ 70 millones en cada una.
- 1.9 La ejecución del Proyecto BO-0033 será desarrollada en estrecha coordinación con la ejecución del BO-0036. El cumplimiento de hitos (benchmarks) del Proyecto BO-0033 será condición para la implantación del BO-0036. Además, el Informe de Proyecto del BO-0036 contendrá detonadores (triggers) de acciones del BO-0033 (ver Marco Lógico adjunto) que deben de ser satisfechos para inicio de la consideración por el Banco de la segunda fase del Proyecto Vial.
- 1.10 El GdB y el Banco han acordado que las medidas de mitigación de impactos socio-ambientales se aplicarán con criterios uniformes en toda la extensión del Corredor, cualquiera que sea el esquema de construcción y financiamiento de la carretera.
- 1.11 La población de la región, especialmente la de los municipios a lo largo del eje del Corredor, reclama la construcción de la carretera, pues sabe que sin ella continuará sin condiciones de acompañar el crecimiento económico del Departamento de Santa Cruz. Esa posición favorable a la carretera se verifica, con mayor o menor énfasis, en todos los sectores sociales.
- 1.12 A pesar de la necesidad, importancia económica, apoyo social local y prioridad otorgada por el Gobierno Nacional, el proyecto del Corredor ha caminado de forma lenta en la última década. Además de las limitaciones presupuestarias, el proyecto vial ha sido objeto de controversias, por la preocupación que suscita en la comunidad nacional e internacional en materia ambiental y social. Así, una orientación de los aspectos socio-ambientales del mismo es condición necesaria para la aprobación de financiamientos internacionales para la obra.

## **B. El Área de Influencia del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez**

- 1.13 Las Áreas de Influencia se definieron en correspondencia a los impactos del Proyecto Vial y al alcance espacial de los mismos sobre los componentes socio-ambientales. Se definieron tres niveles de Áreas de Influencia, de alcance progresivamente más amplio.
- 1.14 El **Área de Intervención** corresponde a los sitios de ejecución de las obras, incluyendo el Derecho de Vía (DDV), las áreas de préstamo y botaderos, los caminos de acceso, los campamentos, las plantas industriales, y otras instalaciones o áreas auxiliares que serán utilizadas durante la etapa de construcción. Constituye una franja estrecha y larga de territorio (100 m de ancho x 570 km de longitud), y pequeñas áreas puntuales próximas.
- 1.15 El **Área de Influencia Directa (AID)** corresponde al conjunto de áreas que recibirán impactos o influencias directas de la constitución del DDV, de la construcción y operación de la carretera, al igual que de otros efectos correlacionados. Para el medio físico-biótico se trabajó con un área envolvente constituida por una franja de algunos kilómetros a cada lado del DDV. Para los aspectos socioeconómicos se consideró la totalidad del territorio municipal de los 6 municipios atravesados por el corredor<sup>2</sup>, con una superficie de 65.180 km<sup>2</sup> y una población de 86.500 habitantes.
- 1.16 El **Área de Influencia Indirecta (AII)** corresponde al conjunto de áreas que serán afectadas por impactos indirectos, resultado de la nueva accesibilidad y del desarrollo inducido por la carretera mejorada y la sinergia con otros proyectos. Las áreas protegidas existentes o propuestas, la continuidad de algunos ecosistemas extensos (Bosque Chaqueño, Bosque Chiquitano, Bañados de Otuquis, Pantanal), la ubicación distribuida de las comunidades indígenas, y la extensión espacial de los proyectos potencialmente sinérgicos con la Carretera, especialmente el Gasoducto a Cuiabá, la Hidrovía y el eje vial Santa Cruz – San Matías – Cuiabá, determinaron la adopción de un AII extensa, que abarca una gran parte del Este del Departamento de Santa Cruz. Se delimitó como área de estudio un polígono con cerca de 226.000 km<sup>2</sup> (2/3 del Departamento de Santa Cruz y 1/5 del territorio nacional), que comprende 15 municipios (algunos parcialmente) y una población total del orden de 240.000 habitantes. El área sujeta a impactos significativos, objeto de las acciones de este Proyecto, se extiende por gran parte de ese polígono estudiado (ver Mapa).

## **C. Situación de la Tenencia de Tierras en el AII**

- 1.17 La actual situación de tenencia es principalmente el resultado del proceso de titulación ocurrido bajo la reforma agraria de 1953 a 1993. La proliferación e inconsistencia de los títulos emitidos en casi el 35% de las tierras de Santa Cruz durante este período son las principales causas de que estos predios no cuenten con derechos de propiedad claramente definidos. Los títulos emitidos carecieron de

---

<sup>2</sup> Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

una descripción física adecuada que impiden hoy conocer con exactitud tanto el tamaño como la posición geográfica del predio en campo. Asimismo, los títulos no tuvieron el soporte legal que sólo brinda su inscripción en el registro general de la propiedad del país, generando problemas de titulación múltiple de un mismo predio. Ambos problemas han dado como resultado que alrededor de 40% de los predios enfrenten en la actualidad conflictos jurídicos o de linderos.

- 1.18 Como en el resto del país, existe además una fuerte inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad legalmente adquiridos en las tierras privadas de Santa Cruz. Para cerca del 70% de predios urbanos y 10% de predios rurales que se estima cuentan con títulos de propiedad registrados, la inseguridad jurídica viene siendo ocasionada tanto por la existencia de un sistema rudimentario de inscripción en el Registro de Derechos Reales (DDRR), que dificulta la secuencia histórica de las transacciones sobre la propiedad, como por la falta de una cobertura catastral adecuada en el país, lo cual impide contar con un archivo gráfico completo de los predios.
- 1.19 En el caso de las tierras comunitarias e indígenas, en Bolivia históricamente se ha dado poca importancia al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios e indígenas. Las adjudicaciones no han contado con soporte legal, lo que ha motivado que muchas de las parcelas hayan sido subdivididas y vendidas informalmente. En el caso de áreas naturales protegidas y concesiones forestales, el Estado ha entregado tierras a particulares en estas áreas pese a las disposiciones legales que impiden la titulación de esta tierra. Todos estos casos han contribuido a profundizar el problema de la tenencia de tierras en el país.
- 1.20 En 1996, el GdB inició la reforma del marco legal e institucional a fin de hacer más eficiente y transparente el manejo y administración de las tierras del país. Con la aprobación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715) se creó el INRA, única entidad encargada de la administración de tierras en el país, y se introdujeron nuevos procedimientos en el juicio agrario con la creación de la Judicatura Agraria para mejorar la administración de justicia. Asimismo, se creó la Superintendencia Agraria como órgano responsable de controlar y regular el uso y gestión del recurso tierra.
- 1.21 Este nuevo marco legal brinda las bases para llevar a cabo la regularización y consolidación de los derechos de propiedad agraria que permite obtener títulos registrados y georeferenciados. El procedimiento utilizado, saneamiento de la propiedad, permite la conciliación de conflictos de posesión, titulación de posesiones legales, anulación de títulos viciados, reconocimiento de derechos propietarios, la formación del catastro legal e inscripción en Registro de Derechos Reales (DDRR) de la propiedad agraria saneada. Asimismo, este marco legal permite el establecimiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que se ejecuta en las áreas comprendidas en las tierras de pueblos indígenas. En los últimos cinco años, el Gobierno inició el proceso de saneamiento de la propiedad agraria con el objetivo de brindar derechos de propiedad completos a sus ocupantes. En Santa Cruz, se encuentran en proceso de saneamiento mediante la modalidad de saneamiento integrado al catastro cerca de 2,2 millones de hectáreas

del total de 37 millones del departamento. Estos trabajos vienen siendo financiados por el Banco Mundial, a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PNAT) de 1995, y por el Fondo Nórdico de Desarrollo<sup>3</sup>. Una evaluación técnica de los resultados parciales demostró que el tiempo de procesamiento de expedientes fue reducido de 12 a 3,5 años a un costo unitario directo de US\$ 3,8/ha o US\$ 743/predio. Esta evaluación concluyó que la modalidad del saneamiento de oficio es la más apropiada para clarificar los derechos de propiedad y brindar garantía jurídica sobre la tierra en el largo plazo. Sobre la base de la experiencia en la ejecución de estos contratos, el INRA ha venido ajustando los procedimientos de saneamiento a fin de reducir aún más los costos unitarios y el tiempo de trámite.

- 1.22 En el caso de las TCO, el INRA ha venido atendiendo desde el 2000, con el apoyo del Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) y del apoyo bilateral danés, más de 8,5 millones de hectáreas de TCO pertenecientes a 11 comunidades en el Departamento de Santa Cruz. Se han identificado adicionalmente dos TCO, una de ellas con inmovilización preventiva en esta misma área.
- 1.23 Asimismo, el Gobierno ha iniciado la modernización del sistema de registro de la propiedad agraria a fin de corregir la situación de inseguridad jurídica de los títulos registrados. Con recursos del PNAT, se han transferido a folio real computarizado más de 73.000 matrículas en el país (34.600 en Santa Cruz). Asimismo, se ha iniciado el trabajo de vinculación del sistema de información registral de DDRR con el sistema de información catastral del INRA en cuatro oficinas departamentales a fin de formar el catastro legal del país. Los resultados de estas actividades han agilizado el sistema de registro, permitiendo a los usuarios inscribir títulos y transacciones casi instantáneamente, así mismo, han reducido las posibilidades de corrupción.
- 1.24 El Gobierno ha iniciado la ejecución de actividades cuyos resultados son insumos necesarios para las actividades de saneamiento. Con recursos de la operación Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) (929/SF-BO), se están financiando: (i) la producción de cartografía básica y densificación de la red geodésica y (ii) la definición, identificación y deslinde de los perímetros de cascos urbanos en los seis municipios que conforman el AID. Así mismo, con apoyo financiero del World Wildlife Fund (WWF) se viene elaborando el diagnóstico de tenencia de tierras en las áreas protegidas San Matías y Otuquis, el cual permitirá establecer una zonificación preliminar para identificar problemas con sobre posición de linderos entre las áreas de saneamiento y concesiones forestales y áreas de intervención humana.

---

<sup>3</sup> Un crédito suplementario del Banco Mundial para el PNAT por US\$7.5 millones fue aprobado en septiembre del 2001. Su objetivo es continuar fortaleciendo la eficiencia y transparencia del sistema de administración de tierras. Este crédito financiará: (i) el saneamiento y titulación de 3 millones de has en La Paz y Santa Cruz (provincia Ichilo), incluyendo la titulación de TCO en los Departamentos de La Paz y Potosí; (ii) apoyo a nuevos asentamientos; (iii) mejora del acceso al registro en áreas rurales y urbanas del país mediante la interconexión de todas las oficinas departamentales y regionales rurales al sistema automatizado de DDRR; (iv) asistencia técnica y capacitación para la preparación y consolidación del marco legal e institucional de administración de tierras; y (v) fortalecimiento del INRA.

## **D. Estudios Ambientales Realizados**

- 1.25 Diversos estudios ambientales, en creciente profundidad, fueron realizados durante la preparación del Proyecto Vial y del presente Proyecto: (i) un primer EIA, elaborado conjuntamente con los estudios de ingeniería de la carretera; (ii) una Evaluación Ambiental Estratégica y la revisión/complementación del EIA anterior; (iii) un estudio especial del Sistema de Regulación de Tenencia de Tierras; (iv) el Plan Operativo del presente Proyecto; (v) la participación de un Panel Asesor de Alto Nivel; y (vi) un nuevo EIA, sobre la base del diseño final de la carretera, presentado por un consorcio privado.
- 1.26 La **Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)** comprendió: (i) un diagnóstico ambiental y social que abarca las diversas áreas de influencia del proyecto; (ii) un amplio proceso de consulta pública e interacción con el Gobierno Nacional y con los diversos sectores sociales involucrados; (iii) el análisis de los impactos del Proyecto, tanto los efectos directos de la construcción y operación de la carretera, como los impactos indirectos, sinérgicos, acumulativos y de largo plazo, provenientes del desarrollo inducido por el Corredor, en interacción con otros proyectos; (iv) la construcción y evaluación de escenarios de largo plazo, para permitir visualizar el futuro de la región bajo diferentes hipótesis de acción; (v) el diseño de medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos; (vi) la organización de esas medidas en un conjunto de programas, que permitan planificar su ejecución; (vii) el diseño de un sistema participativo de gestión institucional y gerencia de los programas. Como resultado de la EAE/EIA quedó formulado un amplio Plan de Acción, que sirve de guía para orientar los pasos futuros en términos de gestión territorial y socio-ambiental.
- 1.27 Considerando las restricciones presupuestarias, el Gobierno Nacional y el Banco acordaron limitar el alcance del Proyecto a un conjunto de medidas prioritarias, consideradas imprescindibles para la viabilidad del Proyecto Vial, y dentro de las posibilidades financieras del país. Esto fue implementado mediante la elaboración del **Plan Operativo del Proyecto**, que permitió: (i) establecer prioridades y adecuar el alcance del Plan de Acción a la restricción financiera; (ii) concertar detenidamente los programas con las futuras entidades ejecutoras; y (iii) readecuar los programas y establecer el detalle operativo de su implementación. (¶2.3)
- 1.28 Con el objetivo de asesorar en forma independiente al Banco y al Gobierno de Bolivia sobre estrategias, prioridades y acciones oportunas que aseguren una implantación ambientalmente sostenible y socialmente adecuada del proyecto vial, el Banco contrató con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) la conformación de un **Pánel Asesor de Alto Nivel**, compuesto por cuatro expertos internacionales y coordinado por el Jefe de la Oficina del Centro Internacional de Ombudsman para el Medio Ambiente y Desarrollo (iniciativa conjunta del Consejo de la Tierra y de la IUCN), y por el Director Regional por Latinoamérica de la IUCN. Las actividades del Pánel incluyeron: (i) revisión de todos los estudios realizados; (ii) visita al terreno, diálogo con las comunidades afectadas y autoridades responsables; (iii) un Informe Final con las recomendaciones sobre las prioridades y estrategias de implementación del



Proyecto. El Panel convalidó las conclusiones de la EAE y las acciones prioritarias indicadas hasta allí en el Plan Operativo, con recomendaciones para fortalecer las iniciativas de apoyo al desarrollo sostenible en base municipal.

- 1.29 El Banco contrató una consultoría en Regularización de la Tenencia de Tierras que preparó: (i) un diagnóstico exhaustivo del marco legal y de los procedimientos utilizados; (ii) recomendaciones de perfeccionamientos y ajustes que deberían ser implementados a corto plazo, antes de iniciar el proceso de saneamiento; y (iii) una versión detallada del Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras.
- 1.30 En el primer semestre de 2001, como parte de una oferta de iniciativa privada para implantación de la carretera en régimen de concesión, el Consorcio CVI preparó un nuevo EIA del Proyecto Vial, ahora sobre la base de la ingeniería de diseño final para toda la extensión de la carretera.

#### **E. Resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)**

- 1.31 La EAE mostró que las preocupaciones con los impactos ambientales y sociales de la carretera se justifican plenamente. El área de influencia abriga una enorme masa boscosa, aún muy poco intervenida, con ecosistemas valiosos como el Bosque Seco Chiquitano, el Bosque Chaqueño, Sabanas Arboladas (cerrado) y el Pantanal. Además, fuera de la gran mancha de suelos buenos del Área de Expansión<sup>4</sup>, el resto del territorio presenta limitaciones diversas al uso agropecuario y una alta vulnerabilidad ambiental.
- 1.32 Los resultados de la EAE resaltan un cuadro de fragilidad ambiental y social en el área de influencia del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez. En **términos ambientales**, la EAE señala que la experiencia mundial en las últimas décadas con la apertura o mejoramiento sustanciales de carreteras en áreas aisladas y con vegetación natural ha mostrado graves consecuencias: las mejores condiciones de accesibilidad durante todo el año y la reducción de los costos de transporte inducen a una rápida expansión de la frontera de ocupación económica (agricultura, ganadería extensiva y explotación maderera) que tienen como resultado la deforestación masiva, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
- 1.33 En los últimos años hubo un avance importante en la designación de extensiones territoriales significativas como áreas protegidas: (i) el Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa-Iya del Gran Chaco, con 3,4 M ha; (ii) el Parque Nacional (PN) y ANMI Pantanal de Otuquis, con 1,0 M ha; y (iii) el ANMI San Matías, con 2,9 M ha. Estas áreas abrigan ecosistemas valiosos, reconocidos como de importancia global.
- 1.34 Sólo Kaa-Iya, bajo administración de la organización del Pueblo Guaraní - Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) ha avanzado más en la implementación

---

<sup>4</sup> Una zona de aproximadamente 100 km al este del río Grande, donde el Proyecto Tierras Bajas del Este (*Lowlands*) financiado por el Banco Mundial, indujo una rápida conversión de bosques en áreas agrícolas.

de mecanismos de gestión, con apoyo de Wildlife Conservation Society (WCS), de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y de recursos de compensación del Proyecto del Gasoducto Bolivia-Brasil, parcialmente financiado por el Banco. San Matías cuenta con una administración incipiente y Otuquis con casi ninguna. El Proyecto del Global Environment Facility (GEF-II) de iniciativa del Banco Mundial, iniciado en Enero de 2001, apoyará la implementación de una estructura básica de gestión en esas dos áreas, pero con un número de guarda-parques y recursos para operación insuficientes para la efectiva protección de áreas de esa dimensión. De hecho, existe el riesgo concreto que la mejoría de accesibilidad cause una ocupación irreversible, y la fragmentación y degradación de esos ecosistemas.

- 1.35 En **términos sociales**, la EAE resalta la situación de pobreza y diversidad étnica y social de la región: la población urbana mayoritariamente de bajos ingresos, los pueblos indígenas (Chiquitanos, Ayoreos e Izoceño-Guaraní), los campesinos, los colonos de otras regiones del país, los colonos menonitas, los pequeños propietarios, los jornaleros, además de las empresas agropecuarias y estancias ganaderas. La situación de inseguridad jurídica en la tenencia de tierras, en asociación con el cuadro crítico de pobreza, especialmente rural, constituyen los factores centrales de vulnerabilidad.
- 1.36 El desarrollo inducido por la carretera aproximará y enfrentará sistemas de producción modernos, vinculados a circuitos globales de comercialización, con sistemas tradicionales de agricultura de subsistencia. La valorización de la tierra y la “permeabilidad” de las comunidades Chiquitanas y campesinas al ingreso de la población atraída por la obra, agudizarán los procesos ya existentes de diferenciación social y de apropiación privada de tierras comunales. La situación de relativo aislamiento de la región no permitió que esas cuestiones se agudizasen, lo que ocurrirá con la carretera mejorada. Las dificultades de acceso limitaron, hasta el momento, la presión sobre la tierra y los impactos sobre los ecosistemas y poblaciones más vulnerables. La nueva accesibilidad valorizará la tierra y tenderá a ampliar la frontera de ocupación económica, los conflictos e impactos sociales y ambientales.
- 1.37 En lo que se refiere a los impactos directos de la construcción del corredor vial, la liberación del Derecho de Vía, con un ancho de 100 m, en todo el tramo Pailón – Puerto Suárez (570 km) requiere la adquisición o expropiación de cerca de 5.150 hectáreas, afectando 17 comunidades indígenas, 7 comunidades campesinas, 3 cooperativas, 2 colonias menonitas, 2 instituciones públicas y cerca de 440 propietarios individuales. Como la carretera atraviesa el eje de mayor ocupación humana, ese universo afectado es bastante significativo en el contexto regional. La parte afectada de la propiedad es proporcionalmente pequeña en la mayoría de los casos, aunque hay algunas situaciones de predios ocupados por población vulnerable en los que la afectación es importante. Serán afectados en total: 67 viviendas rurales (muy precarias en su mayoría), alambradas, tierras habilitadas para cultivos, galpones, 2 cementerios, 2 instalaciones comerciales, un número importante de árboles frutales e instalaciones menores.

- 1.38 Otros impactos socioeconómicos relevantes que requieren mitigación comprenden: (i) la segmentación del territorio e interferencias con las actividades productivas; (ii) la des-estructuración física de algunos núcleos comunales; (iii) los riesgos de accidentes y problemas sociales derivados de la convivencia con las operaciones y el personal de obra; (iv) la pérdida de la ventaja de ubicación de algunos núcleos que han desarrollado una importante actividad comercial; (v) la reorientación del crecimiento de algunos núcleos; (vi) la reorientación laboral de parte de los representantes seleccionados por cada una de las comunidades indígenas; (vii) las tensiones y conflictos al interior de las comunidades, en función de presiones económicas, migratorias y cambios culturales; (viii) los riesgos de accidentes con el cruce frecuente de personas y ganado.
- 1.39 En el **campo institucional** los resultados de la EAE muestran una situación ambigua. Por un lado el país dispone de un marco legal bastante avanzado, fruto del esfuerzo de reformas de los últimos años. Cabe destacar la Ley de Medio Ambiente, la Ley INRA, la Ley Forestal, la Ley de Participación Popular, y sus respectivos reglamentos; además de la zonificación del Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz y el Reglamento General de Áreas Protegidas. El país ha avanzado también en crear las instituciones encargadas de la implementación de esas leyes y de la gestión de esos temas. Sin embargo, la capacidad institucional de ejecución de esas tareas es en general bastante débil, y la presencia en campo limitada.
- 1.40 La evaluación del **marco legal** y de las competencias de los organismos mostró que, teóricamente, existen los instrumentos principales de gestión social y ambiental de los procesos y riesgos descritos. Son muy pocos los casos en que serían necesarias nuevas leyes (Ley de Conservación de la Diversidad Biológica), o modificar las actuales. Ya los casos en se requiere perfeccionar reglamentos e implementar dispositivos son más numerosos y esenciales. Lo fundamental, sin embargo, es que debido a las limitaciones institucionales, la tendencia es que el Estado no tenga condiciones de incidir de forma efectiva para hacer cumplir el espíritu de la ley y ordenar el proceso de desarrollo.
- 1.41 En el terreno de la **conciencia social**, la comprensión general de los riesgos y de la amplitud de los cambios que depara el futuro es aún limitada. Eso ocurre tanto en algunos sectores dirigentes, que sólo ven los beneficios del desarrollo económico y no dan importancia a los impactos, como en las comunidades, cuya reivindicación social se concentra en cuestiones concretas, inmediatas, que ayuden a aliviar el agudo cuadro de carencias de servicios básicos. Indígenas y campesinos plantean también con fuerza la exigencia de titulación de la tierra y el apoyo a las actividades productivas. Existe un importante grado de organización de base, aunque con débil capacidad de acción, y una fuerte demanda de participación.
- 1.42 Éste es, en apretada síntesis, el cuadro de situación y el escenario tendencial que se perfila con la implantación de la carretera, en caso que no se llevara a cabo ninguna acción adicional a la mitigación de los impactos más directos que la ley impone como obligación al Responsable Legal del Proyecto Vial. Es en ese contexto que la EAE desarrolló los programas que constituyen el Proyecto de Protección Ambiental y Social en análisis.

## **F. Consultas Públicas Realizadas**

- 1.43 El Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez fue desarrollado en forma participativa, involucrando a las autoridades, organizaciones y población del área de influencia de la carretera. Los principales mecanismos de participación utilizados se describen a continuación.
- 1.44 Una **primera ronda de consulta pública**, al comienzo del estudio, buscó identificar las percepciones de la población con respecto a: (i) el proyecto vial y sus posibles impactos sobre el ambiente y las condiciones de vida; y (ii) los principales problemas socio-ambientales sentidos por la población, las causas de los mismos y las posibles soluciones. Los resultados de esta primera ronda de consulta fueron de gran valor para la elaboración del Diagnóstico y del Diseño Conceptual de los Programas. Se realizaron 13 talleres (7 en municipios y 6 con pueblos indígenas); participaron 450 ciudadanos, autoridades y representantes de 106 comunidades.
- 1.45 La **segunda ronda de consulta pública** colocó en discusión el “Primer Borrador del Plan de Acción”, y sus resultados fueron de suma importancia para el ajuste de las propuestas de los programas<sup>5</sup>. La Segunda Ronda comprendió 11 talleres de 2 días de duración (6 en municipios y 5 con pueblos indígenas). Participaron cerca de 500 personas. Los talleres con los pueblos indígenas tuvieron una cobertura de representantes del 100% de sus comunidades.
- 1.46 Las **reuniones mensuales del Comité de Participación y Consulta**<sup>6</sup> (CPC), realizadas a lo largo de todo el proceso. El CPC realizó un seguimiento permanente del estudio y aportó críticas, sugerencias y orientaciones concretas para ajustar las propuestas y el modo de actuación de la Consultora.
- 1.47 **Talleres de discusión de temas específicos**, entre técnicos de la firma consultora y representantes del gobierno y de ONGs, en temas como áreas protegidas y conservación ambiental, saneamiento y titulación de tierras y programas indígenas.
- 1.48 En noviembre de 1999, el Gobierno Nacional, el BID y las ONGs acordaron promover una Tercera Ronda de Consulta, después de concluidos los estudios, para colocar en discusión con la población, la versión definitiva del Plan de Acción. Esta tercera ronda se realizó con éxito entre octubre y diciembre de 2000.
- 1.49 La Tercera Ronda de Consulta llevó la discusión con respecto al Proyecto de la Carretera y de las propuestas del Plan de Acción Socio-Ambiental a todas las

---

<sup>5</sup> Este documento fue distribuido con más de un mes de anticipación a todas las instituciones públicas y privadas, ONG, organizaciones indígenas, en los municipios, y en todas las comunidades rurales de los 6 municipios del AID.

<sup>6</sup> El gobierno boliviano, para asegurar la participación de las comunidades afectadas y la transparencia del proceso de implantación de las medidas de protección socioambiental en el área de influencia del Corredor creó, de acuerdo a las recomendaciones del Banco, un Comité de Participación y Consulta (CPC). El CPC fue creado como un foro permanente de participación de las principales entidades representativas de los gobiernos locales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, en todo lo referente a los aspectos socio-ambientales del Proyecto del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez.

comunidades del área de influencia, haciendo un esfuerzo especial para involucrar a pequeños núcleos rurales campesinos e indígenas, así como a la población pobre de las periferias urbanas. Se realizaron **216 Asambleas Comunales** con la presencia de más de **8.200 personas**, lo que representa el 17% de la población adulta del área en que se realizó la consulta<sup>7</sup>.

- 1.50 Las tres rondas de consulta desarrollaron una consulta específica con los pueblos indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Bolivia mediante la Ley 1257<sup>8</sup>.

#### **G. Conceptualización y Diseño del Proyecto (el PPAS)**

- 1.51 El Proyecto de Protección Ambiental y Social en el Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez (PPAS – el Proyecto) atiende a las conclusiones de los estudios de la EAE, que apuntan a la necesidad de implementación de un conjunto de medidas de protección ambiental y desarrollo regional sostenible, destinadas a: (i) asegurar que las obras de mejoramiento del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez sean ejecutadas en el marco de un proceso de ocupación regional ordenado y controlado, que no coloque en riesgo las relaciones socioeconómicas y los ecosistemas naturales; (ii) asegurar que los beneficios del desarrollo silvo-agropecuario inducidos por las obras viales puedan ser capturados por todos los ocupantes del área de influencia, se minimice cualquier impacto negativo sobre la biodiversidad y zonas ambientalmente frágiles, y se respeten los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y campesinas, realizando un amplio programa de saneamiento y titulación de tierras; (iii) contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales.
- 1.52 Para ello, es preciso que: (i) los programas de prevención y compensación considerados de alta prioridad en la EAE (concesión de títulos de propiedad de la tierra, protección de zonas vulnerables, etc.) se encuentren en vigencia antes del comienzo de las obras; (ii) el eventual préstamo del Banco para el mejoramiento de la carretera incluya condiciones que vinculen sus desembolsos al avance de las acciones de mitigación de los impactos ambientales generados por ese proyecto.
- 1.53 Considerando que los impactos indirectos sobre los medios socioeconómico y ambiental del área de influencia de la carretera son de largo alcance y se extienden más allá del término de su construcción, será necesario continuar con algunos

---

<sup>7</sup> La consulta contó con una Cartilla Didáctica, elaborada en lenguaje cotidiano por promotores indígenas y de los municipios. Un grupo de 60 representantes comunales, previamente capacitados, realizó el proceso de consultas llevando la discusión del Proyecto Vial y del Plan de Acción a las comunidades. Las propuestas recogidas en las asambleas comunales fueron consolidadas, por municipio y por organización zonal indígena, en 11 Talleres Zonales y posteriormente en un Taller Final.

<sup>8</sup> Todo el proceso de organización, ejecución y seguimiento de la Consulta fue concertado con las organizaciones matrices, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), y con las organizaciones étnicas y zonales involucradas. Las comunidades fueron clasificadas según su auto-identificación étnica y la organización zonal indígena a la que pertenecen, y las respectivas asambleas comunales fueron conducidas por representantes (facilitadores) de esas comunidades.

programas de mitigación hasta lograr un equilibrio en el desarrollo del área de influencia. Estos programas requerirán de un período de ejecución mayor al normalmente utilizado en los préstamos del Banco. A fin de responder a esta situación, se propone crear mecanismos institucionales y financieros para viabilizar la continuación de las actividades de mitigación a mediano plazo en conformidad con las consideraciones que se presentan a continuación.

- 1.54 Los subprogramas del PPAS cuyo horizonte de ejecución va más allá de la primera etapa de construcción de la carretera (se estima en 10 años), son los siguientes: (a) **Subprograma de Desarrollo Organizativo Indígena:** se requiere fortalecer las centrales indígenas para que los pueblos indígenas puedan defender sus intereses y participar en el proceso de desarrollo de la zona; (b) **Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas:** se necesita proveer al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de recursos y personal suficientes para contrarrestar la presión adicional inducida por la carretera, principalmente a partir de que ésta entre en operación; y (c) **Subprograma de Conservación de Bosques:** se necesita proveer a la Superintendencia Forestal (SIF) de recursos para contrarrestar la presión adicional que la carretera generará sobre las áreas de bosque del AII, principalmente a partir de que la carretera entre en operación.
- 1.55 Las condiciones financieras actuales de Bolivia no permiten al país disponer de los recursos financieros (ni de préstamo, ni de contrapartida) en monto suficiente para cubrir todos los costos de los programas de mitigación, lo que hace necesario diseñar mecanismos financieros novedosos capaces de generar recursos suficientes para cubrir estos costos y dar sostenibilidad a las inversiones.
- 1.56 El citado horizonte de ejecución del Proyecto junto con el hecho de que la aplicación de recursos del eventual préstamo no puede exceder al período de ejecución del Proyecto, hicieron necesario llevar a cabo un análisis de alternativas que permitiera establecer un esquema institucional y financiero acorde con las necesidades del Proyecto. Como resultado de este análisis y dadas las dificultades enfrentadas en el pasado en Bolivia cuando se utilizaron fondos fiduciarios (FF) administrados directamente por entidades del gobierno, se llegó a la conclusión de apoyar el marco institucional de ejecución del Proyecto con la constitución de tres fondos en fideicomiso con organizaciones de la sociedad civil reconocidas, que aseguraren la capacidad técnica y la transparencia en la canalización de los recursos.
- 1.57 Además de la transparencia y capacidad técnica antes referida, la determinación de proponer la constitución de estos fondos en fideicomiso tuvo como base también las siguientes consideraciones: (i) el mecanismo de fondos administrados de forma independiente contribuye a eliminar las injerencias políticas en la ejecución de los subprogramas; (ii) se evita la exigencia de la legislación boliviana que requiere que las cuentas fiscales sean depositadas en moneda nacional, con el alto riesgo que disminuyan en términos de dólares americanos por efecto de las devaluaciones periódicas del peso boliviano; (iii) se cumplen los compromisos concertados luego de negociaciones con representantes de las organizaciones indígenas, del gobierno, ONGs y otras entidades interesadas; (iv) se cumple la solicitud expresa de las

comunidades indígenas de manejar los recursos a través de instancias que representen sus propios intereses.

- 1.58 Las entidades que se han identificado para manejar los fondos son el Fondo Indígena<sup>9</sup>, organismo internacional público, y dos fundaciones privadas, FUNDESNA<sup>10</sup> y PUMA<sup>11</sup>, las cuales recibirían los fondos en fideicomiso para aplicarlos en las actividades que les sean encomendadas mediante convenios. Los fondos en fideicomiso entregados a estas entidades administradoras generarán los rendimientos necesarios para cubrir los recursos faltantes para determinados gastos del propio Proyecto<sup>12</sup>.

#### **H. Consistencia del Proyecto con las Estrategias del Banco**

- 1.59 El diseño del Proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Banco en Bolivia la cual tiene como objetivo central la lucha contra la pobreza y define tres líneas de acción: (i) crecimiento económico y creación de oportunidades, dentro de la cual se inscribe este proyecto; (ii) desarrollo del capital humano y acceso a los servicios sociales básicos; y (iii) gobernabilidad y consolidación de las reformas.
- 1.60 De la misma manera, la operación es consistente con la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) aprobada en junio del 2001 por los directorios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y BID. Al enfocarse en los elementos relacionados con la protección ambiental, este Proyecto aborda el componente de Gestión Ambiental destacado en la EBRP como tema transversal. Finalmente, el programa de inversión de Bolivia para el 2002 se sustenta principalmente en la provisión de recursos de carácter concesional en línea con los acuerdos de política alcanzados con el FMI en diciembre del 2001. En este sentido, el financiamiento no concesional no excederá el 0,8% del PIB para el presente año.

---

<sup>9</sup> El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Fondo Indígena. es una organización multilateral de desarrollo. creada en 1992 mediante un Convenio suscrito hasta la fecha por 23 países y ratificado por 20 de ellos. El BID ejecuta la administración financiera de recursos del Fondo Indígena. en carácter de fideicomiso, y participa en la Asamblea General como observador.

<sup>10</sup> La Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNA) es una fundación de derecho privado. sin fines de lucro. con gestión conjunta público-privada. creada con apoyo del Banco Mundial y de la Cooperación Internacional para canalizar los fondos de donación para las áreas protegidas. Sus finalidades incluyen la captación de recursos para inversión en operaciones y proyectos en las áreas protegidas, y administrar los recursos propios y de terceros (puede constituir fideicomisos). Los recursos de la Fundación están dirigidos a financiar al SERNAP y otras entidades, en beneficio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. FUNDESNA es la encargada de administrar los fondos del Fideicomiso establecido por el programa GEF-II (recursos del GEF canalizados a través de la Agencia Internacional de Fomento). dedicado a financiar los costos recurrentes de la gestión de las áreas protegidas.

<sup>11</sup> La Fundación de "Protección y Uso Sostenido del Medio Ambiente" (PUMA) es una entidad de derecho privado con gestión conjunta público-privada. que administra fondos de USAID para el apoyo a programas ambientales en Bolivia.

<sup>12</sup> Para la ejecución de los tres subprogramas mencionados durante diez años mediante fondos en fideicomiso, el Proyecto debe adoptar mecanismos especiales en materia de desembolsos, utilización de los intereses devengados por los recursos colocados en los fideicomisos, período de ejecución de los subprogramas, y duración de los fideicomisos, tal como se detalla en el Capítulo I.

- 1.61 Las acciones propuestas se orientan tanto al área de crecimiento económico y creación de oportunidades en forma sostenible, particularmente en lo que se refiere a los pequeños productores y a la protección del medio ambiente, como a la promoción de una mayor equidad social. A su vez, los mecanismos de gestión ayudarán a consolidar las reformas a través de la descentralización. El Proyecto Vial y el Proyecto de Protección Ambiental y Social complementan la estrategia del Gobierno en la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales, la creación de infraestructura básica para la integración nacional y el mejoramiento de la vinculación física de Bolivia con los mercados internacionales.

**I. Experiencia del Banco en Proyectos de Carretera en Bolivia y Lecciones Aprendidas**

- 1.62 La acción del Banco en el sector transporte en Bolivia se ha caracterizado por la poca diversificación de la cartera y la concentración en pocos préstamos de gran magnitud en el subsector vial. Los proyectos financiados se han caracterizado por grandes sobrecostos de construcción y demoras respecto de los plazos originalmente establecidos. Además de los problemas debidos a diseños de ingeniería incompletos, y a deficiencias en la supervisión técnica de obras, la falta de consideración de los problemas ambientales de manera oportuna y con el alcance necesario han contribuido para agravar estos problemas.
- 1.63 Las lecciones aprendidas incluyen: (a) la necesidad de considerar los impactos socio-ambientales indirectos y de largo plazo, que en general son más significativos e importantes que los directos, e incluir en el Proyecto (o mediante iniciativas concurrentes) acciones destinadas a mitigarlos; (b) la necesidad de que antes del inicio de la construcción del proyecto vial sean adoptadas medidas que contribuyan a minimizar dichos impactos, por ejemplo: (i) la clarificación de los derechos de propiedad en el derecho de vía antes que sea iniciado el proceso de expropiación; (ii) la asistencia a las poblaciones afectadas, particularmente las comunidades campesinas e indígenas durante todo el proceso de expropiación, para asegurar un tratamiento justo de las demandas.
- 1.64 Una lección de otras agencias internacionales es la experiencia negativa con fondos fiduciarios manejados por entidades gubernamentales (caso del Fondo Nacional para el Medio Ambiente FONAMA en los años 90), lo que llevó a la cooperación internacional a impulsar la creación de fundaciones privadas para canalizar los recursos destinados a proyectos ambientales. FUNDESNA y PUMA son fruto de esas nuevas iniciativas, que cuentan con credibilidad en función del apoyo y la supervisión que reciben del Banco Mundial y USAID. Estas entidades están actualmente funcionando normalmente y con buenos resultados.
- 1.65 Otra lección aprendida fue el éxito en la implementación de las medidas de compensación ambiental relativas al proyecto del gasoducto Bolivia-Brasil, que fue parcialmente financiado por el Banco y que adoptó un sistema de gestión y supervisión ambiental similar al recomendado para el presente proyecto.



## II. EL PROYECTO

### A. Objetivo del Proyecto

- 2.1 El objetivo general del Proyecto es minimizar, controlar, contrarrestar y compensar los impactos socio-ambientales directos, indirectos, acumulativos, de largo plazo o sinérgicos que serán provocados por la implantación y operación del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suárez, promoviendo la conservación ambiental y un proceso de desarrollo económico y social sostenible en el área de influencia, de acuerdo con la legislación Boliviana y las normas del Banco en la materia.
- 2.2 Las acciones de prevención, control y compensación socio-ambiental consideradas prioritarias deberán ser implantadas previo al inicio de las obras de mejoramiento vial que serían financiadas parcialmente por el Banco.

### B. Descripción General del Proyecto

- 2.3 El Proyecto comprende los siguientes componentes:
- a. El Plan de Acción, que tiene como objetivo prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos indirectos, acumulativos y de largo plazo generados por el desarrollo inducido por el corredor vial, así como promover una distribución más equitativa de los beneficios del proyecto vial. El Plan de Acción comprende los siguientes programas: (i) Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras; (ii) Indígena; (iii) Conservación Ambiental; (iv) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal; y (v) Comunicación
  - b. El Plan de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA), exigidos por la legislación boliviana al Responsable Legal del Proyecto Vial (el Servicio Nacional de Caminos, SNC) para controlar, mitigar y compensar los impactos directos de la construcción y operación de la carretera. El PPM-PASA comprende los siguientes programas y actividades: (i) Reposición de Pérdidas; (ii) Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural; (iii) Información e Interacción Social; (iv) Mitigación de Impactos en las Operaciones de Construcción; (v) Supervisión Ambiental de la Construcción (a cargo del SNC); y (vi) Fiscalización Ambiental (a cargo de la Autoridad Ambiental).
  - c. Un Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental del Proyecto, concebido para coordinar y supervisar las acciones de los programas.
- 2.4 El Proyecto financiará: (i) la totalidad de los programas del Plan de Acción; y (ii) los programas del PPM-PASA relativos a la 1ª fase de las obras de implantación de la carretera (¶1.8), cuya conclusión está prevista para 2006; (iii) el Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental relativo a la 1ª Fase de las obras de implantación de la carretera durante la cual la UEP funcionará con su planta de personal completa. Asimismo financiará el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con personal reducido y las auditorías financieras y técnico-

ambiental independientes, en el período de 2007 hasta el primer trimestre de 2012 (§3.12). Las acciones del PPM-PASA referentes a la 2ª fase de obras serán financiadas por la 2ª fase del Proyecto BO-0036. En la etapa final de construcción (prevista para 2007-2008), con el Plan de Acción implantado, el componente ambiental del Proyecto Vial no difiere de un proyecto típico de carretera, que no requiere de una operación de préstamo específica ni de un sistema especial para su gerencia y gestión.

- 2.5 En su conjunto, el Proyecto de Protección Ambiental y Social en el área de influencia del Corredor comprende un conjunto de programas, articulados entre sí, que traducen en acciones concretas las estrategias generales de promoción del desarrollo sostenible.

**C. Descripción de los Programas del Plan de Acción (US\$ 15.378.700)**

**1. Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras (US\$ 5.100.000)**

- 2.6 El programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras financiará el saneamiento, titulación y registro de cerca de 8.800 predios rurales en un área de 7,2 millones de hectáreas, favoreciendo a igual número de familias en los seis municipios que forman el AID de la carretera (Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, Carmen Rivero de Torres, Puerto Suárez y Puerto Quijarro). Esta actividad incluirá además el saneamiento de tierras en las áreas protegidas San Matías y Otuquis. A través de este programa se financiará el apoyo a la oficina nacional del INRA así como a las oficinas departamentales del INRA y de DDRR en Santa Cruz, con un equipo de profesionales altamente calificados que tendrá bajo su responsabilidad la supervisión técnica, administración de contratos y labores propias asociadas con esta actividad.
- 2.7 A fin de mejorar la situación de inseguridad jurídica de la propiedad rural, el Programa consolidará los sistemas de información geográfica del INRA y DDRR en el departamento de Santa Cruz. Para ello, financiará la adquisición de equipo y software para (i) la consolidación y empleo de las bases digitales de información catastral gráfica y alfanumérica (SIG/CAT) que será recibida durante el proceso de saneamiento, titulación y registro en las oficinas locales del INRA y DDRR en Santa Cruz, , Roboré y San José de Chiquitos; y (ii) la modernización en la oficina de DDRR en Santa Cruz e implantación del sistema de inscripción de predios en el registro TEMIS en dos oficinas locales (Roboré y San José de Chiquitos). Tanto el SIG/CAT como sistema TEMIS serán vinculados mediante tecnología Internet.
- 2.8 El programa financiará cursos de capacitación para mejorar los procedimientos de saneamiento de oficio del INRA. Asimismo, se capacitarán funcionarios de DDRR en técnicas de registro para registradores y auxiliares, folio real, grupo TEMIS e informática.

## **2. Programa Indígena (US\$ 3.156.000)**

- 2.9 **El Programa Indígena (PI)** comprende 3 subprogramas: (i) Desarrollo Organizativo; (ii) Planes de Manejo de TCO; e (iii) Iniciativas Productivas, gerenciados por una Unidad Técnica de Gestión y tiene como propósito principal apoyar el fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas, la gestión ambiental y el uso sostenible de sus territorios.
- 2.10 El subprograma de Desarrollo Organizativo (US\$ 2.295.400) apoyará, durante 10 años (hasta final del 2011), el fortalecimiento organizativo de las nueve centrales indígenas existentes en el área de influencia de la carretera: Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos – Turubo (CCICH-T), Asociación Comunitaria (CICOL), Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval (CIRPAS), Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB) y Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI), y las organizaciones indígenas Central Indígena Chiquitana de Pailón (CICHIPA), Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR); Central Indígena Chiquitana de la Provincia Germán Busch (CICHGB). Para permitir esa actuación a mediano plazo, el Proyecto promoverá la constitución de un Fondo en Fideicomiso (FF) administrado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FI), en una institución bancaria local. El FI, organismo internacional público creado con auspicio del Banco será el Fideicomitente. El Organismo Ejecutor transferirá a ese fondo, por intermedio del FI, un capital inicial de US\$ 1,6 millones, con recursos del financiamiento. Los recursos del FF financiarán tareas de organización a ser realizadas por las organizaciones indígenas involucradas; gastos de oficina y operaciones; reuniones de consulta con las comunidades; promoción de actividades de organizaciones de mujeres; y capacitación y formación de recursos humanos; además del seguimiento de los impactos socio-ambientales causados por la construcción de la carretera, siguiendo criterios claros de elegibilidad. Se estima que, el apoyo que se dará a las centrales indígenas proveniente de los recursos del FF, dependerá de la tasa de rentabilidad que se consiga, pudiendo llegar a ser, en promedio, de US\$ 2.150 mensuales para cada central indígena, para las actividades típicas de desarrollo organizativo. En los dos últimos años, el subprograma promoverá la sustitución gradual de esta fuente de recursos por aportes de las propias comunidades basados en los excedentes que consigan generar, de conformidad con el Plan Operativo acordado previamente con el Banco.
- 2.11 En el primer año, el subprograma financiará también (i) la dotación de oficinas de trabajo equipadas con vehículo, computadoras y sistemas de radiocomunicación con las comunidades a las 3 centrales indígenas (CICHIPA, CICHAR y CICHGB) que no llegaron a ser beneficiadas con esa infraestructura operativa por los programas de Desarrollo Indígena (PDI) y de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) de los gasoductos; y (ii) capacitación de representantes seleccionados por cada una de las comunidades indígenas, en aspectos técnico-jurídicos para hacer acompañamiento a los trabajos de saneamiento y titulación de las TCO y tierras de comunidades indígenas. En 2005, el Proyecto financiará la renovación del vehículo, computadoras y radios a las otras 6 centrales indígenas. Los gastos del

subprograma para 2002 y 2003, y la renovación de equipamiento en 2005 serán financiados mediante los mecanismos habituales de desembolso del Banco, mientras que los gastos previstos para los años 2004 a 2011 provendrán de los intereses devengados por el Fondo de Fideicomiso y parte del capital del mismo, de conformidad con lo establecido en los POA preparados con base en el Plan Operativo del Proyecto previamente acordados con el Banco.

- 2.12 El subprograma Planes de Manejo de TCO (US\$ 205.900) financiará consultores, técnicos, promotores indígenas y gastos operativos para la elaboración participativa de planes para las TCO que están siendo constituidas en el AII. Esto constituye un aspecto estratégico para la conservación ambiental en la región, dada la extensión territorial significativa de las TCO y su posible rol como parte de una red de corredores biológicos.
- 2.13 El subprograma Iniciativas Productivas (US\$ 300.000) financiará consultorías, realización de talleres y gastos operativos para: la capacitación de técnicos indígenas y representantes seleccionados por cada una de las comunidades indígenas en la elaboración y administración de proyectos productivos; apoyo y orientación para la captación de recursos, obtención de microcrédito y ejecución de proyectos; y el apoyo a iniciativas piloto de desarrollo productivo de comunidades indígenas. Funcionará en forma integral con el subprograma de Proyectos Demostrativos (ver ¶ 2.26).
- 2.14 El Programa Indígena financiará, durante 4 años, el funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión del PI ubicada en Santa Cruz de la Sierra (US\$ 354.700), abarcando: (i) una pequeña oficina de apoyo técnico y administrativo al PI compuesta por el coordinador del PI, una secretaria, un asistente contable y un chofer que serán contratados con recursos del Proyecto; (ii) presupuesto para consultores y gastos de operación; (iii) las reuniones de la Comisión de Seguimiento y Coordinación (COSECO). Ésta es una medida necesaria para proporcionar capacitación a los dirigentes de las organizaciones y establecer las condiciones para que ellos mismos puedan, posteriormente, administrar con eficiencia los recursos generados por el FF.

### **3. Programa de Conservación Ambiental (US\$ 4.319.500)**

- 2.15 El Programa de Conservación Ambiental tiene como objetivos (i) fortalecer la gestión de las áreas protegidas existentes en el área de influencia, protegiéndolas de la presión de ocupación inducida por la mejoría del acceso; (ii) asegurar la recomposición de los corredores biológicos y servidumbres ecológicas cortados por la carretera, mediante la restauración de la vegetación nativa; (iii) fortalecer la regulación y el control forestal, con vistas a conservar y promover el aprovechamiento racional sostenible (financiero, ambiental y social) de las grandes extensiones de tierras boscosas de vocación forestal de la región, aún poco intervenidas; y (iv) coordinar esfuerzos para impedir la deforestación, la fragmentación de los bosques y la presión de ocupación hacia las áreas de alto valor ecológico, en especial el Bosque Chiquitano, el Gran Chaco y el Pantanal.

- 2.16 El Programa de Conservación Ambiental tiene dos subprogramas sinérgicos entre sí: (i) Manejo de Áreas Protegidas; y (ii) Conservación de Bosques.
- 2.17 El Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas (US\$ 2.246.400) tiene el objetivo de consolidar la gestión de las tres áreas protegidas existentes en el área de influencia de la Carretera (San Matías, Otuquis y Kaa-Iya), permitiendo mejorar gradualmente el nivel de las actividades de protección y administración de esos parques. (§1.54, b).
- 2.18 Para contrarrestar la presión de ocupación que será inducida por la carretera, el programa complementará las acciones básicas de protección previstas en el Programa hacia la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Areas Protegidas (GEF-II), aprobado en diciembre de 2000 (ver Fig. III-3 y §1.34). El Subprograma financiará, de forma creciente entre 2003 y 2006 lo siguiente: (i) la contratación de guarda-parques, permitiendo el incremento gradual del número de guarda-parques en San Matías y Otuquis. En San Matías se pasará de 12 a 30 guarda-parques y en Otuquis de 8 a 18. Se asignarán también 1 chofer y 2 técnicos para San Matías y otro tanto para Otuquis; (ii) el aumento del presupuesto para gastos operativos en las tres áreas (combustible, viáticos, materiales, mantenimiento), de forma consistente con las necesidades mínimas de operación; (iii) un pequeño apoyo para inversiones en San Matías y Otuquis (las inversiones ya están casi cubiertas en forma adecuada por el Programa GEF-II). El Subprograma mantendrá ese nivel de apoyo a las 3 áreas en los años 2007 y 2008, disminuyendo gradualmente entre el 2009 y el 2011, época en que SERNAP, con el apoyo de FUNDESNA, irán asumiendo esos costos, hasta hacerse cargo totalmente de ellos a partir del 2012, de conformidad con lo establecido en el Plan Operativo del Proyecto acordado con el Banco. Para permitir esa actuación a mediano plazo, el Proyecto promoverá la constitución de un FF en una institución bancaria local, administrado por FUNDESNA (Fideicomitente) y transferirá un capital inicial de US\$ 1.970.000, con recursos del financiamiento.
- 2.19 El Subprograma de Conservación de Bosques (US\$ 2.073.100) tiene el objetivo de fortalecer las acciones de regulación y control forestal en el área de influencia de la carretera, para: (i) controlar el desmonte ilegal; (ii) promover el aprovechamiento económico sostenible del recurso forestal; y (iii) contribuir a la conservación de los bosques, preservando tanto el enorme patrimonio forestal como los recursos de biodiversidad.
- 2.20 El Subprograma financiará algunas inversiones y principalmente la contratación de técnicos y los gastos operativos requeridos para las siguientes acciones: (i) el fortalecimiento y funcionamiento de 3 Unidades Operativas de Bosque (UOB) en San José, Roboré y Puerto Suárez; (ii) el funcionamiento del Puesto Fijo de Control Forestal en Pailón; (iii) la creación y funcionamiento de 2 Brigadas Móviles de Control Forestal; y (iv) la implementación de un Sistema de Monitoreo de chequeos, desmontes e incendios forestales, con base en imágenes satelitales dentro de un Sistema de Información Geográfico (SIG).

- 2.21 Los recursos del Subprograma permitirán la continuidad y ampliación de las tareas de regulación y control forestal que la Superintendencia Forestal (SIF) ya viene realizando en el área de influencia. El subprograma financiará totalmente las actividades indicadas en el período 2002-2008 (7 años), y la SIF absorberá gradualmente esos costos a lo largo de los 3 años siguientes (2009-2011) de conformidad con lo establecido en el Plan Operativo del Proyecto acordado con el Banco. Para permitir esa actuación a mediano plazo, el Proyecto promoverá la constitución de un FF (¶1.56) en una institución bancaria local, administrado por la Fundación PUMA, y transferirá un capital inicial de US\$ 1.500.000, con recursos del financiamiento.

#### **4. Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal (US\$ .668.200)**

- 2.22 **El Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal** busca fortalecer la capacidad de gestión territorial, urbana, cultural y ambiental de los seis gobiernos municipales del AID en los temas de su competencia, para que puedan actuar de forma eficaz en el manejo del territorio y hacer frente a las nuevas demandas sociales y ambientales que surgirán con el desarrollo inducido por el Corredor. Apoya también las organizaciones sociales locales y la participación ciudadana y la coordinación intersectorial en la ejecución de las acciones previstas (¶ 1.35 a 1.39).
- 2.23 Este programa tiene seis subprogramas: (i) Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT) Municipales y Capacitación en Gestión Territorial-Ambiental; (ii) Proyectos Demostrativos; (iii) Planificación Urbana; (iv) Catastro Urbano; (v) Valorización del Patrimonio Cultural; y (vi) Propuesta Global para el Desarrollo Regional. Este programa será ejecutado en coordinación con el Préstamo 1075/SF-BO (Desarrollo Local y Responsabilidad Fiscal), de forma que no haya duplicación de esfuerzos y que los municipios puedan acceder a los recursos de los fondos nacionales: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) con base en proyectos técnicamente bien fundamentados.
- 2.24 El Subprograma de Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT) Municipales y Capacitación en Gestión Territorial-Ambiental (US\$ 544.450) financiará la contratación de una firma consultora para la elaboración de PLOT para cada uno de los seis municipios del AID. El Subprograma proveerá también asistencia técnica y capacitación a los gobiernos municipales y organizaciones sociales de los seis municipios del AID, para mejorar la capacidad de gestión territorial y ambiental con participación social.
- 2.25 Los estudios tomarán como punto de partida el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (PLUS), los resultados de la EAE, y la cartografía base existente desarrollada con base en el Programa de Saneamiento de Tierras (cartas del Instituto Geográfico Militar [IGM] e imágenes satelitales SPOT georeferenciadas) con recursos del préstamo 929/SF-BO. Serán producidos mapas temáticos (interpretación de imágenes) sobre esa base digital dentro de un SIG, a escala 1:50.000. Se generarán

también mapas similares a escalas 1:10.000 y/o 1:5.000 para predios tipo, a fin de facilitar la posterior elaboración de planes de manejo al nivel de finca, en apoyo a los proyectos demostrativos a ser implementados (§2.26).

- 2.26 El Subprograma de Proyectos Demostrativos (US\$ 1.478.850) financiará la contratación de empresas de consultoría para la ejecución de proyectos-piloto de incentivo al manejo productivo sostenible que puedan servir de referencia en el escenario futuro de desarrollo de la región con la carretera. Los proyectos pilotos que serán financiados bajo este Subprograma incluirán: (a) proyectos de producción orientados a comunidades campesinas y a pequeños productores no-mecanizados, incluyendo especies nativas; (b) proyectos orientado a estancias ganaderas pequeñas y medianas; y (c) proyectos de manejo de suelos y uso de fertilizantes (para la agricultura empresarial).
- 2.27 El Subprograma de Planificación Urbana (US\$ 89.000) financiará consultorías y gastos operativos para prestar asistencia técnica a los seis gobiernos municipales del AID para la preparación de Planes Maestros de Desarrollo Urbano en las cabeceras municipales, con énfasis en aspectos ambientales, de forma que esas ciudades tengan condiciones de absorber, de manera ordenada, el crecimiento poblacional y el resultante de las actividades inducidas por el mejoramiento de la carretera.
- 2.28 El Subprograma de Catastro Urbano (US\$ 172.000) financiará la contratación de una firma de consultoría para la ejecución de actividades piloto de catastro y titulación urbana para clarificar la situación de tenencia de unos 1000 predios en cada uno de los seis municipios del AID.
- 2.29 El Subprograma de Valorización del Patrimonio Cultural (US\$ 83.500) financiará consultorías, realización de talleres y gastos operativos con vistas a promover el fortalecimiento de las Casas de la Cultura de los municipios. El Subprograma proveerá apoyo técnico y financiero a iniciativas de capacitación de recursos humanos, difusión y valoración de los monumentos arqueológicos e históricos existentes, como forma de preservación y de incentivo al turismo cultural.
- 2.30 El Subprograma “Propuesta Global para el Desarrollo Regional” (US\$ 170.400) financiará la contratación de una firma de consultoría para la elaboración de propuestas de desarrollo sostenible para las varias dimensiones sociales y ambientales, incluyendo un proceso de validación con representantes de los actores sociales e institucionales. La intención es recomendar al Gobierno Nacional una estrategia de mediano y largo plazo que permita la continuidad y ampliación de las iniciativas del Plan de Acción, de modo sostenible.

## **5. Programa de Comunicación (US\$ 135.000)**

- 2.31 Este programa reúne las acciones de interacción del Proyecto con la opinión pública nacional e internacional, la comunidad científica, las ONGs, las entidades de clase, las organizaciones sociales, los vehículos de comunicación y otros públicos involucrados, o interesados en el Proyecto Vial y/o en este Proyecto. El

objetivo es garantizar un flujo constante de informaciones confiables sobre los aspectos socio-ambientales, y establecer canales permanentes de diálogo con los varios segmentos sociales y públicos especializados. El Programa de Comunicación financiará consultorias especializadas, publicaciones, realización de talleres, servicios de Internet y gastos operativos. Utilizará los siguientes instrumentos: (i) página Web en Internet; (ii) publicaciones técnicas; (iii) reuniones, debates, talleres con públicos específicos; (iv) participación en programas de radio y TV; (v) producción de videos y material impreso; y (vi) eventuales visitas controladas a la obra. El área de cobertura de este programa es todo el área de influencia indirecta del proyecto vial. Su ejecución se dará de forma coordinada con el Programa de Información y Interacción Social, parte del PPM y dirigido al público local (ver ¶ 2.37 y 2.38).

**D. Descripción de los Programas del Plan de Prevención y Mitigación (PPM), y del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) (US\$ 5.084.800)**

- 2.32 Con el objetivo de uniformizar los criterios y parámetros de control ambiental a ser utilizados en la construcción de todos los tramos del Corredor Vial y para lograr que el mismo se desarrolle de manera sostenible, el Gobierno ha acordado con el Banco hacer obligatorio el cumplimiento de las medidas de control ambiental que están especificadas en este informe y en el Plan Operativo del Proyecto independientemente de la fuente de financiación. Como condición del primer desembolso, el Gobierno deberá proveer evidencia al Banco de que ha entrado en vigencia la Resolución del Directorio del SNC, en virtud de la cual se establecen pautas en materia ambiental, congruentes con el Plan Operativo de este Proyecto, que deberán aplicarse para la construcción de todas las obras del Corredor. El SNC adoptará las medidas para que los pliegos de licitación para las empresas contratistas de obras y firmas de supervisión de ingeniería incluyan dispositivos que aseguren el cumplimiento de dichas medidas.

**1. Programa de Reposición de Pérdidas (US\$ 2.418.000)**

- 2.33 Este programa tiene como objetivos: (i) liberar oportunamente las áreas del Derecho de Vía (DDV) necesarias para el mejoramiento/construcción de la carretera; (ii) reponer y/o compensar adecuadamente las pérdidas de tierras, mejoras, viviendas e instalaciones afectadas por la constitución del DDV<sup>13</sup>; (iii)

---

<sup>13</sup> Las tierras afectadas (excluyendo las mejoras) tendrán el siguiente tratamiento compensatorio: (i) grandes y medianos productores: se negociará un acuerdo de cesión gratuita al SNC, en función de la valorización del remanente del predio con la implantación de la carretera (procedimiento con base legal, y socialmente aceptable para esa categoría de productores); (ii) pequeños productores individuales (menos de 50 ha), comunidades indígenas y campesinas, y miembros de sindicatos rurales, cooperativas, colonias menonitas y mancomunidades agropecuarias: serán indemnizados en dinero al valor de la tierra sin mejoras, según valores establecidos por la Superintendencia Agraria.

Las siguientes mejoras serán indemnizadas al costo de reposición: (i) la habilitación de las tierras para cultivos anuales y permanentes, y pasturas cultivadas; (ii) los cultivos perennes, incluyendo la inversión para reposición y el lucro cesante hasta que las plantas vuelvan a producir normalmente; (iii) noques, aguadas, corrales, hornos y otras edificaciones o infraestructuras afectadas. Cerca de 15 viviendas rurales de mayor valor serán indemnizadas a valor de mercado; otras 52 viviendas más sencillas serán repuestas en un



mitigar y compensar los diversos impactos socioeconómicos que la construcción, presencia y operación de la carretera causarán en las comunidades vecinas<sup>14</sup>; y (iv) asegurar la rehabilitación socioeconómica de la población afectada<sup>15</sup>. El DDV será liberado, y este programa implementado en toda la extensión del Corredor, ya en la 1ª fase del Proyecto Vial. (§1.37, 1.38).

- 2.34 El programa financiará: (i) la contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras especializadas para realizar la gestión del proceso de liberación del DDV y reposición de pérdidas; (ii) la construcción de las viviendas de reposición; y (iii) la ejecución de las medidas mitigadoras y de compensación (construcciones y provisión de equipos). El costo de las indemnizaciones por concepto de expropiación de inmuebles y/o por pago de mejoras forma parte de la contrapartida nacional del Préstamo que financiará el Proyecto BO-0036.
- 2.35 El diseño del Programa ha tomado en cuenta la Política Operativa del Banco sobre Reasentamiento Involuntario (OP-710).

## **2. Programa de Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural (US\$ 77.600)**

- 2.36 El objetivo del programa es lograr que la implantación del Corredor se realice sin afectar el patrimonio arqueológico y cultural de la región. El Proyecto financiará, en toda la extensión del Corredor, la contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras especializadas que realizarán: (i) la prospección arqueológica previa del DDV y de las áreas auxiliares, para identificar la eventual presencia de sitios arqueológicos que puedan ser afectados por las obras; (ii) excavaciones de rescate en los sitios significativos que queden dentro del DDV, y (iii) la caracterización de los objetos y materiales rescatados. En la 1ª fase de obras del Proyecto Vial, el programa financiará también un arqueólogo que realizará el seguimiento de las operaciones de apertura del DDV y del avance de los frentes de construcción en trechos nuevos, para prevenir la destrucción de sitios que no hayan sido identificados durante la prospección previa. Se prevé la activación de procedimientos para el caso de hallazgos.

---

esquema casa por casa, con una vivienda de patrón básico superior al actual, con costo unitario estimado en unos US\$5.000.

<sup>14</sup> Las medidas mitigadoras y compensatorias en el área rural comprenden la implantación de: (i) 11 pequeños mercados rurales próximo a la carretera; (ii) 21 centros comunales en comunidades indígenas; (iii) nuevas aguadas; (iv) recomposición del núcleo comunal en 4 comunidades; y (v) apoyo a la reinserción socioeconómica de pobladores de 2 comunidades (junto al puente sobre el río Grande). Las 33 pequeñas comunidades directamente afectadas serán compensadas por el conjunto de impactos residuales, inevitables, con la asignación de US\$800.000 para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura social que sean definidas como prioritarias por la población.

<sup>15</sup> En los pocos casos de población rural vulnerable afectada, el Programa prevé la rehabilitación conducida de la misma dentro de la porción remanente del predio, y/o el reasentamiento de eventuales pequeños poseedores desalojados.

### **3. Programa de Información e Interacción Social (US\$ 205.700)**

- 2.37 Este programa comprende la producción y divulgación de información oportuna, fidedigna y de interés público referente al Proyecto Vial (obra, control de los impactos) a las autoridades, dirigentes y población local, y el mantenimiento de canales de diálogo para recibir y dar respuesta a las inquietudes y quejas de la población. El programa busca mantener una relación armónica entre los responsables de la construcción de la carretera, las autoridades y la población local. El Proyecto financiará este programa en los tramos relativos a la 1ª fase de obras. El área de actuación es el área de influencia directa del proyecto vial. Su ejecución se dará de forma coordinada con el Programa de Comunicación (ver ¶2.31).
- 2.38 El programa financiará consultorías especializadas, publicaciones, espacio publicitario en radio y televisión, y gastos operativos; utilizará los siguientes instrumentos: (i) puestos volantes y oficinas fijas de atención al público; (ii) buzones de sugerencias y quejas; (iii) boletines informativos del avance de las obras y de la implantación de las acciones de mitigación; (iv) información por medios masivos (radio y TV locales); (v) notificaciones de entrada y de salida de la obra a las autoridades y dirigentes comunales (reuniones en las poblaciones, antes del inicio y al finalizar las obras en cada sector); y (vi) talleres de capacitación en educación vial y seguridad dirigidos a la población en general.

### **4. Control de Impactos durante la Construcción**

- 2.39 Mitigación de Impactos en las Operaciones de Construcción: comprende las medidas y obras requeridas por el EIA del Proyecto Vial para prevenir y minimizar los impactos de las obras de construcción de la carretera sobre los medios físico, biótico y socioeconómico, en conformidad con las normas técnicas ambientales y el Código de Conducta de los trabajadores, cuyo cumplimiento será exigido a los contratistas de construcción por la Supervisión Ambiental. El costo de estas medidas y obras es parte de los presupuestos de construcción de la carretera en cada tramo.
- 2.40 El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) comprende las rutinas y especificaciones para el monitoreo de la ejecución de los programas del PPM, especialmente del control ambiental de las operaciones de construcción de la carretera. El PASA será ejecutado por la Supervisión Ambiental del SNC<sup>16</sup>.
- 2.41 La Supervisión Ambiental del SNC (US\$ 1.232.000) verificará el cumplimiento de las normas técnicas ambientales previstas en el EIA del Proyecto Vial con relación a los procedimientos constructivos; la instalación, operación y recuperación de campamentos de obra; la utilización y recuperación de canteras, préstamos y botaderos; la calidad del trabajo ambiental realizado por los contratistas; la

---

<sup>16</sup> El Gobierno y el Banco acordaron que el SNC adoptará los criterios de responsabilidad ambiental (especificaciones técnicas ambientales, responsabilidades específicas, personal a ser asignado, procedimientos de control y de gestión ambiental de obra) establecidos en el Plan Operativo del Proyecto, e incluirá en los pliegos de licitación de los Contratistas de Construcción y de la Supervisión de Ingeniería, la obligación de cumplir y hacer cumplir tales especificaciones y procedimientos

implementación de medidas mitigadoras; y el monitoreo de las actividades de construcción de la carretera. El Proyecto financiará la contratación de consultores especializados (Inspectores Ambientales y Promotores Sociales) que harán el seguimiento sistemático de las operaciones de obra y participarán en el planeamiento y diseño de soluciones, enfatizando la prevención de impactos y funcionando de forma coordinada con la supervisión técnica del Proyecto Vial. El Proyecto financiará los trabajos de la Supervisión Ambiental en todo el corredor en la 1ª fase de obras del Proyecto Vial.

- 2.42 La Fiscalización Ambiental del Proyecto Vial (US\$ 1.111.500), a cargo de la Autoridad Ambiental competente, Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal (VMARNDF), como lo exige la Ley Boliviana, verificará el cumplimiento de la legislación ambiental y de todos los requisitos establecidos en el EIA y en la Licencia Ambiental concedida al SNC. El Fiscal dispone de autoridad operativa frente al SNC y los contratistas; tendrá estabilidad funcional y sólo podrá ser removido de su puesto con expresa no-objeción del Banco. El Proyecto financiará, para toda la extensión de la carretera y durante la 1ª fase de obras del Proyecto Vial, la labor de: (i) un equipo especializado de Fiscalización de la Autoridad Ambiental (consultores), y (ii) gastos operativos de Comités de Fiscalización, representativos de las comunidades vecinas, que apoyarán los trabajos de inspección fuera de los recintos de obra.

**E. Descripción del Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental (US\$ 3.013.000)**

- 2.43 El Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental del Proyecto fue concebido para coordinar y supervisar las acciones de los planes antes mencionados. Este componente financiará: (i) el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), que coordinará, supervisará y brindará apoyo técnico especializado a ambos planes, (ii) Auditorías Financieras externas; (iii) un Auditor Socio-Ambiental independiente; y (iv) el funcionamiento de las instancias de coordinación y participación social. Estará liderado por el MDSP, pues la mayoría de las instituciones ejecutoras del Proyecto están vinculadas a ese Ministerio.
- 2.44 La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) contará con especialistas y consultores, y estará encargada de coordinar el trabajo de las entidades ejecutoras de los programas, poner en práctica las acciones previstas, efectuar la gerencia y supervisión de los diversos contratos de gestión, orientar técnicamente la ejecución de las acciones, resolver las interfases técnicas e institucionales entre los planes y sus diversos programas, apoyar la tramitación de documentos y la liberación de pagos, preparar los informes de avance, y preparar la rendición de cuentas al MDSP y a los organismos financiadores.

**F. Costo y Financiamiento del Proyecto**

- 2.45 El Proyecto tiene un costo total de US\$ 26,5 millones, de los cuales US\$ 21 millones serán financiados por el Banco (Fondo de Operaciones Especiales - FOE), y el equivalente de US\$ 5,5 millones será financiado por el Prestatario, como

contrapartida local. Esta contrapartida local podrá incluir el equivalente de US\$ 3 millones provenientes del Fondo Nórdico de Desarrollo (FND)). El Prestatario se compromete adicionalmente a que los recursos de contrapartida local correspondientes a gastos previstos de ser efectuados por las Entidades Co-ejecutoras principales deberán ser programados por las mismas en sus respectivos presupuestos, de conformidad con los techos asignados por el Ministerio de Hacienda. El monto correspondiente al financiamiento del Fondo Nórdico, que podrá formar parte de la contrapartida local, será transferido con carácter no-reembolsable a las Entidades Co-ejecutoras principales, y podrá ser inscrito en el Presupuesto General de la Nación bajo las características de financiamiento externo.. La tabla II.1 resume los costos y la estructura de financiamiento por programa. El detalle de los presupuestos se puede consultar en el Plan Operativo del Proyecto.

**Tabla II.1 – Costos y Financiamiento del Proyecto (en US\$)**

<b>Categoría</b>	<b>Banco</b>	<b>Fondo Nórdico</b>	<b>Contra- partida</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
<b>1. Sistema de Gerencia y Gestión Socioambiental</b>	<b>2,580,900</b>	<b>0</b>	<b>432,100</b>	<b>3,013,000</b>	<b>11.4%</b>
1.1. Unidad Ejecutora del Proyecto	1.659.000		256.500	1.915.500	
1.2. Auditoria Financiera	472.500		90.000	562.500	
1.3. Auditor Socio-Ambiental	252.000		48.000	300.000	
1.4. Participación de la Sociedad Civil	197.400		37.600	235.000	
<b>2. Plan de Acción</b>	<b>11,329,500</b>	<b>2,916,500</b>	<b>1,132,800</b>	<b>15,378,800</b>	<b>58.0%</b>
2.1. Saneamiento. Titul., Reg. Tierras (Consultorías, equipos)	2.436.000	2.200.000	464.000	5.100.000	
2.2. Programa Indígena (Consult., equipos)	2.907.000	0	249.000	3.156.000	
2.2.1- Des. Org. Indígena (18 meses)	352.800		67.200	420.000	
2.2.2- Planes Manejo TCOs	173.000		32.900	205.900	
2.2.3- Iniciativas Productivas	252.000		48.000	300.000	
2.2.4- Unidad Técnica de Gestión	297.900		56.800	354.700	
2.2.5- Aporte Fondo de Fideicomiso	1.600.000			1.600.000	
2.2.6- IE y equipamiento Unidades gestión	231.300		44.100	275.400	
2.3. Conservación Ambiental	4.183.600	0	135.900	4.319.500	
2.3.1. Manejo de Áreas Protegidas (Consultorías, equipos)	2.202.200		44.200	2.246.400	
2.3.2. Conservación de Bosques (Consultorías, equipos)	1.981.400		91.700	2.073.100	
2.4. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Mpal. (Consult. equipos, obras)	1.689.500	716.500	262.300	2.668.300	
2.5. Comunicación (Consultorías)	113.400		21.600	135.000	
<b>3. Plan de Prevención y Mitigación</b>	<b>4,287,600</b>	<b>0</b>	<b>757,100</b>	<b>5,044,700</b>	<b>19.0%</b>
3.1. Reposición de Pérdidas (Consultorías, equipos, obras)	2.081.100		336.900	2.418.000	
3.2. Arqueología (Consultorías)	65.200		12.400	77.600	
3.3. Información e Interacción Social (Consultorías)	172.800		32.900	205.700	
3.4. Supervisión Ambiental SNC (Consultorías, equipos)	1.034.900		197.100	1.232.000	
3.5. Fiscalización Socio-Ambiental (Consultorías, equipos)	933.600		177.800	1.111.400	
<b>4. Imprevistos</b>	<b>903,900</b>	<b>83,500</b>	<b>24,600</b>	<b>1,012,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>5. Costos Financieros</b>	<b>1,898,100</b>	<b>0</b>	<b>153,400</b>	<b>2,051,500</b>	<b>7.7%</b>
5.1. Inspección y Vigilancia	210.000			210.000	
5.2. Comisión de Crédito			153.400	153.400	
5.3. Intereses durante ejecución	1.688.100			1.688.100	
<b>Total</b>	<b>21,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>26,500,000</b>	

### III. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

#### A. El Prestatario, el Ejecutor y las Entidades Participantes

3.1 El prestatario del financiamiento propuesto será la República de Bolivia, quien se hará cargo de la amortización del préstamo y transferirá al Organismo Ejecutor los fondos del Proyecto con carácter no reembolsable. Los recursos del préstamo y de la contrapartida nacional serán transferidos por el Organismo Ejecutor a las entidades co-ejecutoras del Proyecto en los mismos términos y condiciones, para la ejecución de las actividades del Proyecto.

3.2 El MDSP será el Organismo Ejecutor del Proyecto y tendrá la responsabilidad de su ejecución ante el Banco. El MDSP será la única institución de contrapartida del Banco y tendrá una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), que será el brazo operativo del Ministerio para desempeñar esas funciones. La actividad inicial de la UEP consistirá en la contratación de consultores para capacitar al personal propio y de los co-ejecutores en aspectos relativos al gerenciamiento de proyectos y coordinación interinstitucional. El Organismo Ejecutor llevará a cabo la ejecución del Proyecto con la participación de las siguientes entidades (tabla III-1, Fig. III-1):

#### 3.3 Plan de Acción:

- a) **El Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras:** El INRA, que a su vez contará con la participación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (“Consejo de la Judicatura”), en lo relativo a las actividades relacionadas con el Registro de Derechos Reales de Santa Cruz (“DDRR”).
- b) **El Programa Indígena:** (i) Subprograma de Desarrollo Organizativo, el MDSP/UEP y el FI, en coordinación con: las organizaciones indígenas: CPESC, OICH, CCICH-T, CICOL, CIRPAS, CANOB, CABI y CIDOB, y las de CICHIPA, CICHAR y CICHGB, cuando éstas cuenten con personería jurídica; (ii) el Subprograma de Planes de Manejo de Tierras Comunitarias de Origen (“TCOs”): MDSP/UEP; y (iii) el Subprograma de Iniciativas Productivas: MDSP/UEP y la Fundación Trópico Húmedo.
- c) **Programa de Conservación Ambiental:** (i) Subprograma Manejo de Áreas Protegidas: SERNAP y FUNDESNAP; y (ii) Subprograma Conservación de Bosques: SIF y PUMA
- d) **Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal:** (i) Subprogramas Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT) Municipales y Capacitación en Gestión Territorial-Ambiental, Planificación Urbana, Catastro Urbano, Valorización del Patrimonio Cultural, y Propuesta Global para el Desarrollo Regional: el MDSP; y (ii) Subprograma Proyectos Demostrativos: Fundación Trópico Húmedo.

**e) Programa de Comunicación: MDSP**

3.4 **Plan de Prevención y Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (“PPM y PASA”)** : (i) Programa de Reposición de Pérdidas: el Servicio Nacional de Caminos (SNC<sup>17</sup>), que contará a su vez con la participación del INRA y la Prefectura de Santa Cruz; (ii) Programa de Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural: el SNC, que contará a su vez con la participación de la Unidad Nacional de Arqueología (UNAR) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD); (iii) Programa de Información e Interacción Social, y Supervisión Ambiental: el SNC; y (iv) Fiscalización Ambiental del Proyecto Vial: VMARNDF

3.5 **Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental:** el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP).

3.6 El Proyecto tendrá: (a) las siguientes Entidades Co-ejecutoras Principales: INRA, Consejo de la Judicatura, , SERNAP, Superintendencia Forestal (SIF) y SNC. (b) Las siguientes Entidades Administradoras de Fondos de Fideicomiso: FI, FUNDESAP y PUMA.. (c) La FDTA-TH actuara como Entidad Beneficiaria Coejecutora. (d) Las entidades : CPESC, OICH, CCICH-T, CICOL, CIRPAS, CANOB y CABI serán entidades beneficiarias y CICHIPA, CICHAR y CICHGB, siempre y cuando cuenten con personería jurídica, serán también podrán ser Entidades Beneficiarias del Proyecto.

**B. Estructura Operativa Interna del Proyecto.**

3.7 El Proyecto contará con un **Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental**. El Subsistema de Gerencia asegurará la ejecución eficiente y oportuna del Proyecto, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos de los programas, y que el Proyecto sea conducido con agilidad, eficiencia y

**Recuadro III-1. MDSP  
Ministerio de Desarrollo Sostenible y  
Planificación**

El

responsable de la planificación estratégica del Estado y el ordenamiento territorial, además de la articulación armónica del crecimiento económico, social y tecnológico con la preservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente. Sus funciones las ejecutan viceministerios e instituciones bajo tuición ministerial. Los viceministerios

Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal (VMARNDF)

Las instituciones bajo tuición del MDSP que están involucradas de alguna forma con el Proyecto incluyen: Fonabosque; Sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables (SIRENARE); Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); Superintendencia Forestal y Superintendencia Agraria (estas dos últimas, instituciones autónomas que integran el SIRENARE).

El Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios (MACPIO) pasó a englobar al Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIO), antes parte del MDSP.

<sup>17</sup> El Servicio Nacional de Caminos (SNC), vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), será el organismo responsable de la construcción de la carretera. Es responsable de la ejecución de las obras de la red fundamental de carreteras y del mantenimiento de los servicios. El SNC está en proceso de modernización institucional, con apoyo del Banco Mundial. Cuenta con una Gerencia Socio-Ambiental, responsable de la planificación e implementación de los programas socio-ambientales asociados a los proyectos viales que ejecuta (PPM-PASA). La eficiente coordinación MDSP – SNC es vital para el éxito tanto de este Proyecto como del Proyecto Vial.

transparencia, de acuerdo con la legislación Boliviana y las normas del Banco. Estará compuesto por: (i) la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), vinculada al Despacho del Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación; y (ii) un Auditor Socio-Ambiental independiente.

- 3.8 La ejecución de los programas y subprogramas estará a cargo de las entidades co-ejecutoras indicadas en la Tabla III-1. Algunos programas serán implementados directamente por la UEP. Tres subprogramas requieren un plazo de ejecución de diez años; en estos casos, el Fondo Indígena, una Organización Pública Internacional y dos Fundaciones Privadas, FUNDESNAP y PUMA, en su conjunto denominadas “Entidades Administradoras” recibirán fondos en fideicomiso para aplicarlos en las actividades que les serán encomendadas mediante convenios.
- 3.9 El Subsistema de Gestión Socio-Ambiental consiste en los mecanismos de coordinación, participación y consulta que funcionarán durante la implementación de los programas. Comprende las siguientes instancias: (i) el Comité de Coordinación y Seguimiento (CCS) que reúne a las entidades del Gobierno Nacional directamente involucradas en el Proyecto; (ii) el Comité de Participación y Consulta (CPC), un foro permanente de discusión y deliberación con las principales entidades representativas de los gobiernos locales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, sobre los aspectos sociales y ambientales del Proyecto Vial; (iii) la Subcomisión Técnica de Tierras; y (iv) la participación y consulta al nivel local, durante la implementación de los programas.
- 3.10 La coordinación sectorial entre la UEP y las varias entidades co-ejecutoras y entidades administradoras será realizada: (i) para toma de decisiones importantes, por medio del CCS; (ii) para la gestión de actividades del día a día, mediante articulación con los gerentes responsables de los programas. Los miembros de los mencionados Comités no percibirán remuneración especial y serán convocados por el MDSP periódicamente o cuando se estime conveniente, con el propósito de revisar y analizar el desarrollo del propio Proyecto y su relación con la construcción del Corredor Vial Santa Cruz - Puerto Suárez.

### **1. Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)**

- 3.11 La UEP es una unidad , adscrita y dependiente directamente del Despacho del Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, encargada de realizar la dirección, gerencia, administración general, contable y financiera y control de la ejecución del Proyecto. La UEP será creada por Resolución Ministerial de acuerdo con términos de referencia acordados con el Banco. La creación y funcionamiento de la UEP será condición previa al primer desembolso.
- 3.12 La UEP, en los 4 ½ primeros años, hasta el 2006, estará conformada básicamente por: (i) un Gerente (Especialista Ambiental que desempeñará la Jefatura del Proyecto); (ii) 3 especialistas, uno Social, otro en Gestión Territorial-Ambiental y Desarrollo Sostenible, y un Ingeniero Vial-Ambiental; (iii) consultores de corto plazo; (iv) Un administrador del Proyecto; (v) un especialista en seguimiento y programación financiera, (vi) un contador; y (vii) equipo de apoyo. Después del



2006, cuando se prevé que la mayoría de los subprogramas estén concluidos, seguirá funcionando hasta la terminación del proyecto, en el primer trimestre de 2012, conformada así: (i) un administrador y una secretaria a tiempo integral; y (ii) 3 consultores (un contador, y 2 especialistas uno social y uno ambiental) 1 mes por semestre. (¶2.4). La UEP, el equipo ambiental local del SNC y la Fiscalización Ambiental compartirán las instalaciones de la oficina central del Proyecto en Santa Cruz.

- 3.13 El personal de la UEP será contratado por medio de concurso público y en carácter de consultores individuales por el MDSP. El Gerente y el Administrador están siendo seleccionados de conformidad con los procedimientos estándares del Banco en la materia y con cargo a los recursos del Préstamo 929/SF-BO. Asimismo, todo el resto del personal de la UEP será contratado con cargo a los recursos del préstamo 929/SF-BO, financiamiento que se extenderá hasta la expiración del plazo de desembolso de dicho préstamo o hasta la fecha en que haya sido declarado elegible para desembolsos el presente Proyecto, lo que ocurra primero. Los recursos del financiamiento se utilizarán para el pago de salarios de los funcionarios de la UEP y otros gastos administrativos incrementales que sean requeridos para la instalación y funcionamiento de la misma. La responsabilidad de la selección de los demás funcionarios corresponderá al Gerente de la UEP en consulta con el MDSP, y se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos estándares del Banco en la materia. La responsabilidad de todos ellos estará reglamentada por la Ley SAFCO.
- 3.14 Las funciones de la UEP serán la planificación, activación, coordinación, supervisión y reporte sobre la ejecución de los programas, específicamente: (a) ejercer el liderazgo de la coordinación y ejecución del Proyecto; (b) promover la firma de convenios y contratos de gestión entre las diferentes instituciones involucradas y coordinar la ejecución de las actividades entre las mismas; (c) establecer y actualizar periódicamente el Plan de Trabajo detallado para la ejecución del Proyecto; (d) en el caso de los programas o subprogramas de responsabilidad directa de la UEP, la Unidad ejercerá la función de gerencia sobre los especialistas y entidades contratados; (e) supervisar la ejecución de los programas a cargo de Entidades Coejecutoras Principales y la Entidad Beneficiaria Coejecutora; (f) aprobar los POA y transferir los recursos correspondientes en conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo que se suscribirá con el Banco y los convenios y contratos de gestión suscritos con las Entidades Coejecutoras Principales, la Entidad Beneficiaria Coejecutora y las Entidades Administradoras de los FF, según corresponda; (g) mantener un control permanente del desarrollo del Proyecto, mediante la operación de un sistema de seguimiento que incluya cronogramas, cumplimiento de metas físicas, grado de efectividad de las acciones, evaluaciones de resultados en conjunto con las entidades participantes, y control de la ejecución presupuestaria; (h) realizar la gerencia administrativa y financiera del Proyecto, velando por la observación de los procedimientos del Banco en materia de desembolsos, adquisiciones, contabilidad y documentación; (i) reportar los avances y resultados del Proyecto, de conformidad con el esquema que se defina entre el Gobierno Nacional y el BID.

- 3.15 Cada programa/subprograma fue concebido dentro de un esquema específico de gestión, que en varios casos será contratado con pequeñas empresas, ONGs o instituciones especializadas, de conformidad con los procedimientos estándares del Banco en la materia bajo términos de referencia también aprobados por el Banco y con supervisión de la UEP. Esa forma de contratación deberá lograr trabajos eficientes a un costo significativamente menor.

## **2. Auditor Socio-Ambiental Independiente**

- 3.16 El Proyecto ha sido diseñado con énfasis en la auditoría de procedimientos y resultados durante la ejecución de los programas, más que en evaluaciones ex-post. Eso permite: (i) la detección temprana de posibles falencias, desvíos de rumbo, trabas específicas, u otro tipo de problemas que puedan comprometer el cumplimiento de las metas del Proyecto; y (ii) la corrección oportuna de los problemas (§3.68).
- 3.17 El Proyecto contará con un Auditor Socio-Ambiental Independiente que verificará periódicamente: (i) el cumplimiento por parte de los actores involucrados, de las normas y procedimientos socio-ambientales acordados; (ii) el avance las actividades y acciones establecidas y los resultados alcanzados; y (iii) el grado de satisfacción de los diversos actores sociales involucrados con relación a la ejecución de las obras viales y componentes del Proyecto. El Auditor realizará auditorías socio-ambientales trimestrales hasta fines de 2006, y semestrales entre 2007 y 2011, o en menor tiempo cuando las circunstancias lo exijan.
- 3.18 El Auditor será contratado con fondos del Proyecto, y seleccionado por el MDSP de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, con la no-objeción del Banco. Actuará de manera independiente y no podrá tener ninguna relación de intereses con el Gobierno ni con las instituciones y personas involucradas en el Proyecto. Se reportará al MDSP/UEP y al BID. Será contratado por un periodo definido y sólo podrá ser sustituido con la no-objeción previa del BID.

## **3. Las Instancias de Coordinación y Participación Social**

- 3.19 El Gobierno Nacional determinó, en el IV trimestre de 1999, la constitución de dos instancias principales de coordinación para los aspectos socio-ambientales del Proyecto del Corredor: (i) el Comité de Coordinación y Seguimiento (CCS); y (ii) el Comité de Participación y Consulta (CPC).
- 3.20 El CCS, en su actual configuración, constituye un foro, de carácter consultivo, de debates y negociaciones para las decisiones relacionadas con los impactos socio-ambientales de las obras de construcción de la carretera y al desarrollo regional por ella inducido, con el objetivo principal de facilitar la integración de las acciones de los organismos gubernamentales involucrados en la ejecución del Proyecto. Es presidido por el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo e integrado por representantes del Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil (VMTCAC), SNC, VMARNDF, INRA, Viceministerio de

Asuntos Indígenas y Originarios (VAIO), Prefectura de Santa Cruz (PSC) y Directorio Único de Fondos (DUF).

- 3.21 El **CPC**, presidido por el VMARNDF, ha dado seguimiento permanente a la preparación del Proyecto, aportando con críticas, sugerencias y orientaciones concretas para ajustar las propuestas, en términos de su contenido y su modo de implantación (§ 1.46).
- 3.22 Se prevé la continuidad del funcionamiento de esas dos instancias durante todo el período de construcción de la carretera, para asegurar la necesaria coordinación y participación de entidades públicas, gobiernos locales y organizaciones sociales en la implementación de los programas. Los comités participarán en las evaluaciones bi- anuales de medio término. (§ 3.68).
- 3.23 Los componentes del Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental del Proyecto, incluyendo el CCS, CPC y la UEP, serán institucionalizados mediante Resoluciones Ministeriales e Interministeriales, para que las decisiones que sean tomadas en los comités cuenten con el compromiso de todos sus integrantes. Las resoluciones establecerán la estructura, composición y reglamento operativo de los comités. El dictado de esas resoluciones será condición previa al primer desembolso .
- 3.24 Se requerirá de la conformación de subcomisiones técnicas encargadas de discutir y coordinar acciones en temas específicos. Un tema que puede llegar a ser complicado, es el de saneamiento y titulación de tierras, en conjunto con aspectos vinculados al ordenamiento territorial y la asignación de las tierras fiscales que resulten del saneamiento, la gestión de tierras boscosas, la gestión territorial en áreas protegidas y otros. El Proyecto prevé la conformación de una **Subcomisión de Tierras** en el CPC, que sería el foro de concertación de esos asuntos.
- 3.25 El Proyecto implementará mecanismos y métodos apropiados de participación pública de acuerdo a los tipos de actores sociales involucrados (v.g. poblaciones indígenas, comunidades campesinas, gobiernos y poblaciones locales, sector privado), y a las situaciones específicas de cada programa. Además de los recursos previstos en algunos programas, el Proyecto<sup>18</sup> incluye recursos (ver tabla de Costos (II.1), ítem 1.4) para financiar la asistencia técnica y proveer los recursos necesarios para hacer efectiva la participación social, enfocándose hacia los sujetos sociales representativos.

### **C. Ejecución Técnica del Proyecto**

- 3.26 El Plan Operativo del Proyecto, elaborado en concertación con las diversas entidades administradoras y co-ejecutoras, detalla los aspectos de implementación de todos los programas del Plan de Acción, del PPM-PASA y del Sistema de Gerencia y Gestión Socio-Ambiental. El Plan Operativo fue acordado entre el GdB y el Banco.

---

<sup>18</sup> Los programas de Reposición de Pérdidas y la Fiscalización Ambiental prevén recursos específicos para apoyar la participación social.

- 3.27 Las empresas que realicen la gestión y/o ejecución de subprogramas o programas, bajo contrato con la UEP o con los co-ejecutores directos de programas, serán siempre: (i) contratadas bajo términos de referencia precisos; (ii) remuneradas por resultados, de acuerdo con la concreción de productos o metas; y (iii) supervisadas por la UEP, que aportará orientación técnica y gerencial para suplir eventuales deficiencias, del esquema de cooperación.
- 3.28 La UEP recibirá los recursos del préstamo del Banco y tendrá el control de los aportes de la contrapartida nacional; además, tendrá la responsabilidad de su correcta aplicación en los diferentes rubros establecidos en el esquema de financiamiento. La diversidad de actividades previstas requiere del uso de criterios especiales en el manejo de fondos. En la mayoría de los casos, la UEP desembolsará en forma directa a los co-ejecutores los fondos destinados a la ejecución de las acciones, sea como adelantos o reembolsos, de conformidad con las políticas del Banco. En los subprogramas de Desarrollo Organizativo Indígena, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques, que requieren un tiempo mayor de ejecución, se utilizarán tres Fondos en Fideicomiso. (Ver Fig. III-2)
- 3.29 Los tres fideicomisos serán constituidos a través de organizaciones sin fines de lucro, con personería jurídica propia y autonomía de gestión con relación al Estado. Estas tres “entidades administradoras” de los fondos son: el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (“Fondo Indígena”), la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP) y la Fundación de “Protección y Uso Sostenido del Medio Ambiente” (PUMA). (¶ 1.58 y nota de pie de página #14, 15 y 16).
- 3.30 El mecanismo del fideicomiso está diseñado para funcionar durante 10 años (el último retiro de recursos será al final de 2010; la terminación de actividades al final de 2011). La UEP efectuará el seguimiento de la operación de los fondos durante el periodo de ejecución del proyecto y hasta el 2011. (¶ 3.12). El Banco continuará a dar su no-objeción anual al POA y controlar la rendición de gastos hasta que se hayan utilizado totalmente los recursos de los fondos o haya finalizado el plazo de ejecución de los mismos, a fines de 2011.
- 3.31 Los tres fideicomisos serán constituidos por las entidades administradoras (fideicomitentes) en instituciones bancarias bolivianas, y denominados en US\$. Los intereses que serán devengados por los fondos, estimados a una tasa de 5,5% al año, ya están computados como parte de los recursos que financiarán las actividades previstas. Las entidades administradoras recibirán como remuneración 5% del monto retirado anualmente del fondo para ser utilizado en los subprogramas respectivos.
- 3.32 Este Proyecto propone plazos de ejecución y desembolsos de 10 años contados a partir de la fecha de vigencia del Contrato de Préstamo, con el objeto de permitir, durante este plazo, la ejecución de los Subprogramas de Desarrollo Organizativo, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques y los desembolsos para actividades relacionadas con el control y supervisión de la utilización de los recursos desembolsados para dichos Subprogramas. Asimismo, para la ejecución

de estos Subprogramas, se propone que: (a) el plazo de ejecución anteriormente indicado, se aplique también a los Fondos de Fideicomiso que se constituirían para financiar los tres Subprogramas; y (b) se efectúen desembolsos de los recursos de financiamiento del Banco al Organismo Ejecutor, en una sola vez para la constitución de los Fideicomisos, por medio de las Entidades Administradoras de los mismos; se utilicen los intereses devengados por dichos recursos para la ejecución de los Subprogramas; y el plazo para la justificación de la utilización de la totalidad de estos desembolsos sea también de 10 años.

- 3.33 Esta propuesta se formula y somete a consideración del Directorio con base en lo establecido en la Sección 1 del Artículo IV del Convenio Constitutivo que establece: “Créase un Fondo para Operaciones Especiales del cual se efectuarán préstamos en condiciones y términos que permitan hacer frente a circunstancias especiales que se presenten en determinados países o proyectos”.
- 3.34 Con respecto a los plazos de ejecución y desembolsos propuestos para este Proyecto cabe indicar que los mismos se alejan de las políticas del Banco en materia de la duración de proyectos específicos y préstamos globales tradicionales (GN-750-1, párr. 1.05 (a) y 2.08 (a) y GN-2085-2, Sección III.B). No obstante, cabe agregar que estas políticas no contemplan específicamente este tipo de proyecto.
- 3.35 Con respecto a los desembolsos, se proponen mecanismos que no están contemplados específicamente en las prácticas y políticas usuales del Banco. Estos mecanismos permitirían: (1) que la mayor parte de los recursos para estos Subprogramas pueda ser desembolsada, en una sola vez, para cubrir gastos previstos en los mismos; (2) que los intereses y otros ingresos que devenguen estos recursos en los Fideicomisos anteriormente mencionados, financien gastos previstos en los tres Subprogramas, y constituyan una importante fuente de su financiamiento; y (3) que el plazo para la justificación al Banco de la utilización de la totalidad de estos desembolsos sea también de 10 años.
- 3.36 La justificación de la necesidad de este esquema de ejecución utilizando los tres fondos en fideicomiso, se encuentra en el Capítulo I, Sección G del presente documento.

#### **1. Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras (S&T)**

- 3.37 La ejecución del programa estará a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La Unidad de Coordinación y Administración del Proyecto Nacional de Administración de Tierras (UCAP), entidad que administra programas similares financiados por el Banco Mundial y la Cooperación Internacional, tendrá la responsabilidad general de coordinar la administración del programa en lo relativo a adquisiciones y contrataciones, pagos, informes financieros e informes de grado de avance. La UCAP será el órgano de enlace con la UEP. La Gerencia de Servicios, unidad dependiente de la Dirección Nacional del INRA, tendrá la responsabilidad general de efectuar la supervisión técnica de las actividades del programa y mantendrá el contacto interinstitucional con DDRR. A solicitud del INRA, el Viceministro de Asuntos Indígenas y Originarios (VAIO) del Ministerio

Sin Cartera responsable de los Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios (MACPIO) realizará los informes de necesidades espaciales para las TCOs en demanda en el área a sanear, con la asistencia del consultor contratado por el Organismo Ejecutor (§ 1.21 , 2.6 a 2.8).

- 3.38 Dos firmas especializadas, que serán contratadas por el INRA con cargo a este Proyecto, ejecutarán la actividad de saneamiento, titulación y registro según Términos de Referencia (TdR) ya acordados con el Banco. La primera firma apoyará el saneamiento de oficio de las tierras en la provincia de Chiquitos; la segunda lo hará tanto en los municipios de El Carmen, Puerto Quijarro, Puerto Suárez en la provincia de Germán Busch como en las tierras de las áreas protegidas San Matías y Otuquis. La modalidad de saneamiento de oficio incluirá el desarrollo secuencial de las siguientes tareas: levantamiento de información secundaria, campañas públicas de difusión, realización de pericias (peritajes) de campo, construcción de la base preliminar digital del catastro legal, evaluación técnico-jurídica, exposición pública de resultados, expedición de certificados de saneamiento o títulos de propiedad, e inscripción en el registro de la propiedad inmueble de DDRR.
- 3.39 La adquisición del equipo para la consolidación e integración de los sistemas de información predial en las oficinas del INRA y DDRR en Santa Cruz será realizada por el INRA y el Consejo de la Judicatura, respectivamente siguiendo los procedimientos estándares del Banco en esta materia. Tanto el INRA como el Consejo de la Judicatura en lo correspondiente a DDRR contratarán individualmente los profesionales para la implantación de sus sistemas. El INRA contratará firmas consultoras para llevar a cabo los cursos de capacitación.

## **2. Programa Indígena**

- 3.40 El MDSP/UEP será el ejecutor principal del Programa Indígena. . Para la ejecución de los subprogramas MDSP/UEP contratará personal y consultores, organizará seminarios, promoverá la participación de representantes de las comunidades, y realizará la gestión técnica y administrativa de las actividades. El Programa Indígena contará con una Comisión de Seguimiento y Coordinación (COSECO), instancia deliberativa (al nivel de las organizaciones indígenas) para todo el Programa Indígena, e interlocutor institucional de las organizaciones en su relación con el Proyecto y el Gobierno. Los miembros de la COSECO son: un representante de cada una de las entidades beneficiarias y un representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
- 3.41 Cerca de 50% de las actividades del Programa Indígena serán financiadas por medio de un FF, administrado por el Fondo Indígena, conformado a partir de un aporte inicial del Proyecto de US\$ 1,6 millones (ver cronograma de desembolso). Se ha condicionado el desembolso de estos recursos a la suscripción del Contrato de Gestión del FF y el Contrato del FF con la institución bancaria. La gerencia del fideicomiso y el control del uso de los recursos retirados anualmente del mismo, estarán a cargo de un Directorio ad-hoc de 5 miembros, con participación paritaria del Gobierno (MACPIO y Prefectura de Santa Cruz), Organizaciones Indígenas (dos delegados designados por la COSECO) y la Secretaría Técnica del Fondo

Indígena. El uso de los recursos retirados anualmente del Fondo de Fideicomiso obedecerá a un ciclo anual de gestión basado en un Plan Operativo Anual (POA) del Programa, que estará sujeto a cuanto sigue: (a) preparación y concertación en el seno de la COSECO de una propuesta de POA del Subprograma que identifique las acciones prioritarias a ser realizadas durante el período considerado, de acuerdo con las disponibilidades de recursos; (b) análisis y aprobación del borrador del POA del Subprograma por el Directorio ad hoc del Fondo en Fideicomiso; (c) análisis y aprobación del borrador del POA del Subprograma por el MDSP/UEP y no-objeción del Banco; (d) autorización del Fondo Indígena para que los recursos presupuestados en el POA del Subprograma aprobados, sean depositados en la cuenta bancaria de la UEP establecida para esta finalidad; (e) análisis y aprobación de las rendiciones de cuentas del Fondo de Fideicomiso por el Directorio ad hoc del Fondo de Fideicomiso e informe a MDSP/UEP; (f) luego del análisis y aprobación de las rendiciones de cuentas, el Organismo Ejecutor las enviará al Banco.

### **3. Programa de Conservación Ambiental**

#### **a) Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas**

- 3.42 Para este subprograma se constituirá otro FF. El subprograma utilizará la estructura institucional y financiera existente para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), construido en los últimos años con participación

#### **Recuadro III-2. SERNAP**

El SERNAP fue creado en 1997 por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo con el propósito de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), garantizando la gestión integral de las áreas consideradas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica. SERNAP tiene independencia de gestión técnica y administrativa, y cuenta con una estructura y competencia de alcance nacional, con sede en la ciudad de La Paz. SERNAP administra de forma directa las áreas protegidas de San Matías y Otuquis, y mediante convenio con CABI (organización del pueblo Guaraní), el Parque Nacional y ANMI Kaa-Iya.

#### **Recuadro III-3. Proyecto GEF-II**

El proyecto GEF-II, iniciado en Enero de 2001, contempla 3 fases de 5 años cada una. En esta primera fase 2001-2005, el proyecto GEF-II capitalizará un Fondo de Fideicomiso dedicado a financiar los costos recurrentes de la gestión de las áreas protegidas (inicialmente 10 áreas prioritarias, que incluyen San Matías, Otuquis y Kaa-Iya). El Fondo será administrado por FUNDESNAP y recibirá un monto inicial de US\$ 9,78 millones. Los restantes US\$ 33,9 M del total de US\$ 43,7 M del proyecto GEF-II serán administrados como fondos corrientes durante 5 años, dedicados a fortalecer el SNAP y SERNAP, mediante proyectos de inversión y asistencia técnica. La meta del proyecto es que el SNAP sea económicamente independiente después de 20 años.

activa de la Cooperación Internacional. Esta estructura comprende el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – FUNDESNAP, los instrumentos de gestión financiera y el Programa GEF-II (ver Recuadros III-2 y III-3 y pie de página #10) (§ 2.18).

- 3.43 El Proyecto financiará: (i) las actividades del subprograma en 2003 mediante desembolsos de la UEP al SERNAP, y (ii) las actividades de 2004 al 2011 mediante el FF. Para esto último, la UEP transferirá a FUNDESNAP a fines de

2002, el aporte de capital inicial del fideicomiso de US\$ 1.970.000 y FUNDESNAP constituirá subcuentas específicas para cada área (US\$ 950.000 para San Matías, US\$ 720.000 para Otuquis y US\$ 300.000 para Kaa-Iya). Se ha condicionado el desembolso de estos recursos a la suscripción del Contrato de Gestión del FF y el Contrato del FF con la institución bancaria. El uso de los recursos retirados anualmente del Fondo de Fideicomiso a obedecerá un ciclo anual de gestión. Este ciclo de gestión, con base en un Plan Operativo Anual (POA) del Subprograma, estará sujeto a lo siguiente: (i) preparación por SERNAP de una propuesta de POA, por área protegida, que identifique las acciones prioritarias a ser realizadas en el periodo considerado, y en base a la información, tanto técnica como financiera suministrada por FUNDESNAP oportunamente a SERNAP. SERNAP elaborará los POA de las tres áreas protegidas, velando por la complementariedad técnica y financiera de las actividades financiadas por este Proyecto con aquellas actividades financiadas por otros donantes; (ii) análisis y aprobación del borrador de los POA de las tres áreas protegidas por el MDSP/UEP y no objeción del Banco; (iii) autorización de la UEP para que FUNDESNAP transfiera los recursos depositados en el agente financiero para la cuenta bancaria específica establecida por SERNAP para esta finalidad; (iv) SERNAP entregará estados financieros y de ejecución trimestrales al MDSP/UEP; (v) aprobación de los estados financieros e informes por el MDSP/UEP; y (vi) luego de analizar y aprobar dichos informes y estados financieros, el Organismo Ejecutor los enviará al Banco. El manejo efectivo de los recursos y la gestión de las áreas protegidas estará a cargo del SERNAP.

- 3.44 Simultáneamente con la presentación de los POA de las tres áreas protegidas al **MDSP/UEP**, SERNAP deberá adjuntar los POA correspondientes al Proyecto GEF- II, **para las mismas áreas protegidas con el objeto de que sea verificada la efectiva complementariedad** de las acciones y los respectivos presupuestos. Posteriormente SERNAP deberá informar al Banco la aprobación de los referidos *POA* por la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

#### **b) Subprograma de Conservación de Bosques**

- 3.45 La Superintendencia Forestal (SIF) será el organismo ejecutor del Subprograma de Conservación de Bosques. El Proyecto transferirá recursos a la SIF para los ejercicios de 2002 y 2003 con base en POA. Los recursos para los ejercicios de 2004 a 2011 serán depositados de forma global, a fines del año 2002

##### **Recuadro III-4. Superintendencia Forestal (SIF)**

La Superintendencia Forestal (SIF) es un órgano público autárq

controlar el uso sostenible y conservación de las tierras forestales y bosques del país. La estructura orgánica y las atribuciones de la SIF fueron establecidas por la Ley Forestal, aprobada en 1997. Tiene domicilio legal en la ciudad de Santa Cruz. Los recursos financieros de la Superintendencia provienen de los porcentajes de los recaudos de patentes forestales y multas, además de convenios de cooperación con proyectos y entidades. Detiene atribuciones legales de Regulación, control, arbitraje y fiscalización:

(US\$ 1.500.000), en un FF administrado por la Fundación PUMA (¶ 2.21, Recuadro III-4 y nota de pie de página 11). Se ha condicionado el desembolso de estos recursos a la suscripción del Contrato de Gestión del FF y Contrato del FF con la institución bancaria. El Fondo tendrá el objetivo de apoyar las actividades de regulación y control forestal de la SIF en el AII. Por tanto, la Fundación y el



Fondo deberán haber sido habilitados, a satisfacción del Banco, antes de fines de 2002.

- 3.46 El uso de los recursos retirados anualmente del Fondo de Fideicomiso administrado por la Fundación PUMA obedecerá un ciclo anual de gestión. Este ciclo de gestión, con base en un Plan Operativo Anual (POA), estará sujeto a lo siguiente: (a) preparación por la SIF de una propuesta de POA del Subprograma, que identifique las acciones prioritarias a ser realizadas en el período considerado, y en base a la información, tanto técnica como financiera suministrada por la fundación PUMA oportunamente a la SIF; (b) análisis y aprobación del borrador de los POA por el MDSP/UEP y no-objeción del Banco; (c) autorización de la UEP para que la Fundación PUMA transfiera los recursos depositados en el agente financiero para la cuenta bancaria específica establecida por la SIF para esta finalidad (d) la SIF entregará estados financieros y de ejecución trimestrales al MDSP/UEP; (v) aprobación de los estados financieros e informes por el MDSP/UEP; (vi) luego de analizar y aprobar dichos informes y estados financieros, el Organismo Ejecutor los enviará al Banco

#### **4. Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal**

- 3.47 La conducción general de este Programa, y la ejecución de los subprogramas PLOT municipales, planificación urbana, catastro urbano, valorización del patrimonio cultural, y propuesta global para el desarrollo regional, estarán a cargo de la UEP, en coordinación con las Alcaldías Municipales. La Fundación para el Desarrollo de Tecnología Agropecuaria Trópico Húmedo (FDTA-TH) será el organismo ejecutor de los cuatro componentes del subprograma Proyectos Demostrativos
- 3.48 Casi todos los subprogramas de este Programa serán implementados por empresas o entidades especializadas o firmas consultoras contratadas por la UEP y la FDTA-TH, con la no-objeción del MDSP/UEP mediante proceso licitatorio. Sólo los Subprogramas de Planificación Urbana y Patrimonio Cultural, de pequeña dimensión, serán implementados por medio de consultores individuales contratados por el MDSP/UEP siguiendo los mismos procedimientos arriba indicados.
- 3.49 Los subprogramas tienen un enfoque altamente participativo, involucrando las comunidades, la sociedad civil, las autoridades, instituciones locales, ONGs nacionales e internacionales y los programas de cooperación internacional. La UEP será responsable de activar y coordinar la participación de esos actores, al tiempo de asegurar la ejecución eficiente de las actividades contratadas con firmas consultoras. Contará para eso con un asesoramiento especializado que aporte una visión global de los retos del desarrollo sostenible.

#### **5. Programa de Comunicación**

- 3.50 Este Programa será ejecutado directamente por la UEP en coordinación con el SNC. La UEP contratará una asesoría en comunicación, para que ésta sea dirigida a públicos especializados; los contenidos y la interacción serán desarrollados por

los propios profesionales de la UEP, movilizando también especialistas de las Entidades Coejecutoras Principales, la Entidad Beneficiaria Coejecutora y las entidades beneficiarias, cuando sea necesario.

## **6. Programa de Reposición de Pérdidas (PRP)**

- 3.51 La ejecución del PRP estará a cargo del SNC, en convenio con INRA y la Prefectura de Santa Cruz (PSC). Las actividades iniciales, a cargo del INRA, ya están en ejecución financiadas con recursos del Préstamo 929/SF-BO y comprenden: (i) el saneamiento de una franja de 580.000 Ha englobando los predios afectados por el DDV; (ii) el catastro físico de las mejoras existentes en el DDV. El INRA propiciará el registro de las propiedades tituladas en DDRR. El registro de las parcelas del DDV en DDRR contendrá garantías del derecho indemnizatorio del afectado con relación a las mejoras existentes. En el marco del convenio suscrita entre el SNC, INRA y la Prefectura de Santa Cruz se contratará un arquitecto y un abogado de la PSC que participarán en los trabajos para adelantar: (i) la interacción con la población afectada; (ii) la discusión a respecto de las viviendas a reponer; (iii) el levantamiento de la situación legal de las tierras y mejoras. Toda información que el INRA levante en el proceso de saneamiento servirá para que el SNC y la Prefectura de Santa Cruz efectúen el Programa de Reposición de Pérdidas.
- 3.52 El SNC contratará, con recursos del Proyecto, consultores individuales y/o firmas consultoras o entidades especializadas (contratistas de gestión) que ejecuten los servicios de acción social y la gestión del Programa. Para la liberación del DDV (entre Pailón y Puerto Suárez – 570 km), el contratista de gestión ejecutará las siguientes tareas: avalúo de tierras y mejoras afectadas; catastro socioeconómico de las familias afectadas; conformación de núcleos de co-gestión y concertación de las pautas de reposición y rehabilitación con los afectados; diseño (participativo) de las nuevas viviendas; negociación de acuerdos individuales de cesión de derechos; apoyo a la tramitación del pago de las indemnizaciones y del registro de la transacción; orientación técnica para la rehabilitación productiva; seguimiento del proceso legal de expropiación en casos de no-acuerdo. Los contratistas de gestión del PRP mantendrán puestos de atención para los afectados y proveerán apoyo social a la población vulnerable. El SNC manejará un presupuesto para cubrir gastos de asesoramiento técnico-legal independiente para los afectados. La construcción de las 52 viviendas e instalaciones de reposición será realizada por empresas constructoras contratadas por el SNC.
- 3.53 La Prefectura de Santa Cruz (PSC) es la institución competente para efectuar las expropiaciones en el Departamento con la participación de las municipalidades, de ser pertinente. La PSC será responsable de los costos de adquisición del DDV. El Proyecto financiará un experto legal de la PSC que será responsable de: (i) el seguimiento a los trabajos, especialmente a las negociaciones y acuerdos, (ii) agilizar la tramitación y homologación de acuerdos; (iii) encaminar el trámite de expropiación, en los casos que correspondan.

- 3.54 Para la implementación de las medidas mitigadoras y de compensación (en 33 comunidades próximas al trayecto de la carretera, entre Pailón y Puerto Suárez), los contratistas de gestión ejecutarán las siguientes tareas: estudios técnicos e interacción con las comunidades para detallar, mediante un proceso ampliamente participativo, las acciones y obras a ejecutar; diseños técnicos; apoyo al SNC para la contratación de la firma constructora; supervisión de las obras en las comunidades; capacitación de operadores; y transferencia de la operación a las comunidades o Alcaldías, cuando corresponda.

## **7. Programa de Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural**

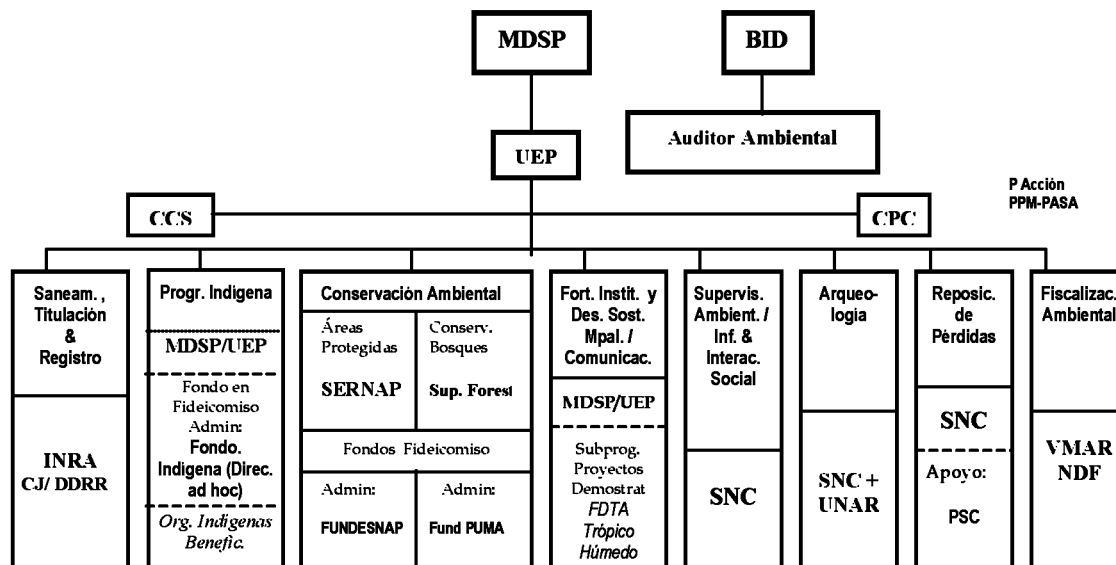
- 3.55 La ejecución del Programa estará a cargo del SNC que para ello contratará consultores individuales y/o firmas consultoras o instituciones especializadas en arqueología. El Programa realizará la prospección arqueológica, las excavaciones de rescate y la caracterización de piezas, previo al inicio de la obra. El monitoreo arqueológico del avance de los frentes de obra en el DDV será de responsabilidad de la Supervisión Ambiental del SNC, en cada fase de la obra. El plan de trabajo será previamente presentado para aprobación a la Unidad Nacional de Arqueología – UNAR del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la cual efectuará también el seguimiento, con fondos del programa.

**Tabla III.1 – Entidades Co-ejecutoras y Administradoras de los Programas del Proyecto**

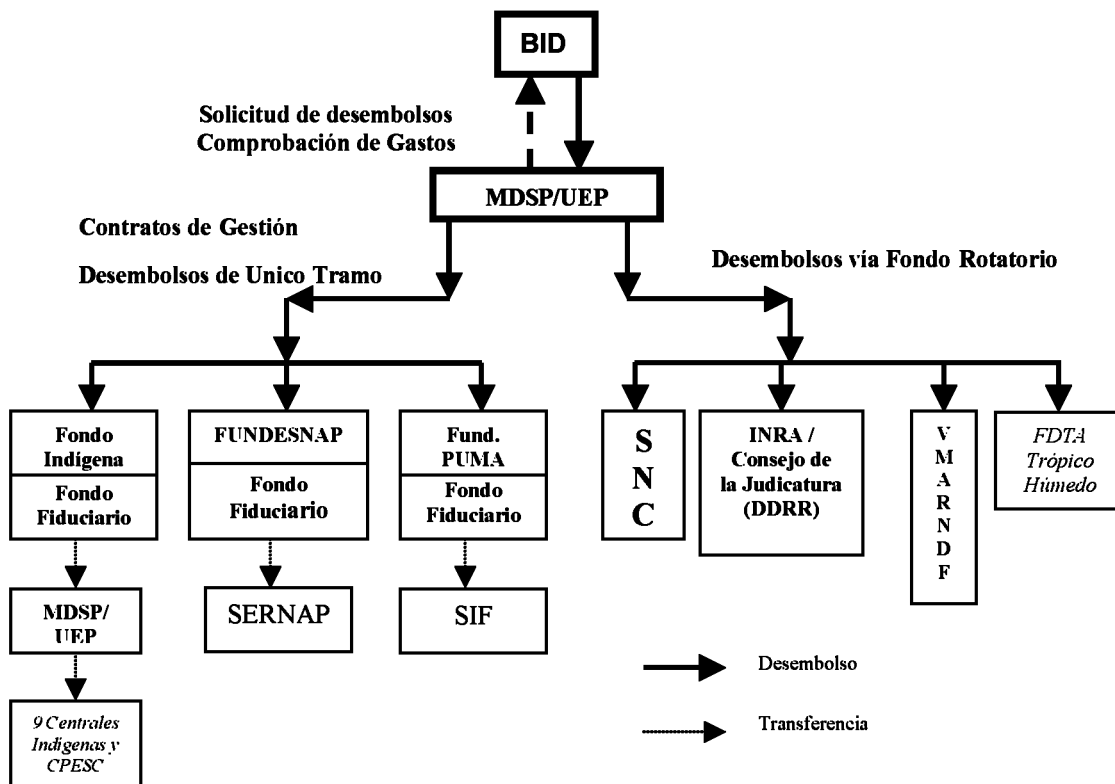
<b>Programa / Subprograma</b>	<b>Entidades Co-ejecutoras Principales</b> ENTIDADES ADMINISTRADORAS FF <i>Entidades Beneficiarias</i>
<b>Plan de Prevención y Mitigación, PASA</b>	
Reposición de Pérdidas ▪ Liberación del DDV ▪ Medidas mitigadoras y compensatorias	SNC, PSC, INRA SNC
Patrimonio Arqueológico y Cultural	SNC, en coordinación con UNAR
Información e Interacción Social	SNC
Supervisión Ambiental, PASA	SNC
Fiscalización Ambiental	VMARNDF
<b>Sistema de Gerencia y Gestión</b>	
Sistema de Gerencia	MDSP/UEP
Sistema de Gestión Socio-Ambiental	MDSP/UEP
<b>Plan de Acción</b>	
Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras	INRA (participa Consejo de la Judicatura por DDRR)
Conservación Ambiental ▪ Manejo de Áreas Protegidas ▪ Conservación de Bosques	(activación a cargo de MDSP/UEP) ▪ SERNAP , FUNDESNA ▪ SIF , FUNDACIÓN PUMA
Fortalecim. Institucional y Des. Sostenible Municipal ▪ Proyectos Demostrativos ▪ Los demás subprogramas	MDSP/UEP <i>FDTA Trópico Húmedo</i> MDSP/UEP
Indígena ▪ Desarrollo Organizativo  ▪ ▪ Planes de Manejo de TCOs ▪ Iniciativas Productivas	▪ MDSP/UEP <i>FONDO INDÍGENA, Directorio ad-hoc<sup>19</sup> (¶ 3.44) – Organizaciones indígenas beneficiarias.</i> ▪ MDSP/UEP ▪ MDSP/UEP + <i>FDTA Trópico Húmedo</i>
Comunicación	MDSP/UEP

<sup>19</sup> El Directorio ad hoc esta compuesto por cinco delegados: 2 de las organizaciones indígenas, 2 del GdB (MACPIO y PSC) y la Secretaría Técnica del Fondo Indígena.

**Fig. III-1 Proyecto de Protección Ambiental y Social del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez**  
**Organigrama de Ejecución**



**Fig. III-2 Esquema de Ejecución Contable/Financiero**



**Tabla III-2 Cronograma de Desembolsos**

<b>Cronograma de Desembolsos del Préstamo del Banco</b>											
(Valores en US\$)											
<b>Categoría</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>A. Administración y Supervisión</b>											
1. Unidad Ejecutora del Proyecto	199.900	307.700	304.000	296.000	282.200	65.600	48.100	48.100	48.100	48.100	11.200
2. Auditor Socio-Ambiental	16.800	33.600	33.600	33.600	33.600	25.200	16.800	16.800	16.800	16.800	8.400
3. Participación de la Sociedad Civil	21.800	50.400	50.400	39.500	35.300	0	0	0	0	0	0
4. Auditoría Financiera Externa	0	63.000	63.000	63.000	63.000	50.400	37.800	37.800	37.800	37.800	18.900
<b>Plan de Acción</b>											
1. Saneamiento, Titul., Reg. Tierras	533.400	1.612.800	289.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Programa Indígena	297.500	377.800	252.700	324.900	54.100	0	0	0	0	0	0
Aporte al FF Indígena	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Conservación Ambiental											
3.1. Manejo de Áreas Protegidas	0	232.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte al FF p/ APs	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Conservación de Bosques	254.300	227.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte al FF p/ Bosques	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal	21.000	575.100	723.200	318.800	51.400	0	0	0	0	0	0
5. Comunicación	12.600	28.500	24.400	24.400	23.500	0	0	0	0	0	0
<b>Plan de Prevención y Mitigación</b>											
1. Reposición de Pérdidas	327.600	1.623.300	130.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Arqueología	33.600	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 y 3.4. Sup. Amb. + Información	238.600	274.700	233.500	231.000	229.900	0	0	0	0	0	0
5. Fiscalización Ambiental	110.900	203.300	208.300	206.600	204.500	0	0	0	0	0	0
<b>Imprevistos</b>	113.900	440.200	188.900	83.200	48.800	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	1.800
<b>Total, excepto aportes a los FFs</b>	2.181.900	6.081.300	2.502.000	1.621.000	1.026.300	146.700	108.100	108.100	108.100	108.100	40.300
<b>Aportes a los FFs</b>	5.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total General</b>	<b>7.251.900</b>	<b>6.081.300</b>	<b>2.502.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.026.300</b>	<b>146.700</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>40.300</b>

**Tabla III-3 Proyecto de Protección Ambiental y Social del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez (BO-0033)**  
**Cronograma de Ejecución**

Componente / Subcomponente		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>1.</b>	<b>Sist. Gerencia y Gestión Socioambiental.</b>																						
1.1	Unidad Ejecutora del Proyecto		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
	Control Téc.-Admin. FFs 2a. Fase Proy vial											x		x		x		x		x			
1.2	Auditoria Financiera			x		x		x		x		x											
	Auditoria Financiera FFs 2a. Fase Proy vial													x		x		x		x		x	
1.2	Auditor Socio-Ambiental		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
	Auditor Socio-Ambiental 2a. Fase Proy vial											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.3	Participación de la Sociedad Civil		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
<b>2.</b>	<b>Plan de Acción</b>																						
2.1	Saneamiento, Titul., Reg. Tierras		x	x	x	x	X																
2.2	Programa Indígena (ver Nota 3)		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
	FF Des. Org. Indig. depositado			x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Acciones de Des. Org. financiadas por el FF					x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.3	Conservación Ambiental																						
2.3.1	Manejo de Áreas Protegidas (ver Nota 3)			x	x																		
	FF Áreas Protegidas depositado			x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Manejo de A. Protegidas financiado por el FF					x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.3.2	Conservación Bosques (ver Nota 3)	x	x	x	x																		
	FF Bosques depositado			x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Acc. de Cons. Bosques financiadas por el FF					x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.4	Fort. Institucional y Des. Sostenible Mun.		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
2.5	Comunicación		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
<b>3</b>	<b>Plan de Prevención y Mitigación</b>																						
3.1	Reposición de Pérdidas		x	x	x																		
3.2	Arqueología		x	x	x																		
3.3	Información e Interacción Social 1ª fase (BO-0036)			x	x	x	X	x	x	x	x												
	Inf. e Inter. Social 2a. Fase Proy. Vial										x	x	x	x	x								
3.4	Supervisión Ambiental 1a. Fase Proy. Vial (BO-0036)		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
	Sup. Amb. 2a. Fase Proy. Vial										x	x	x	x	x								
3.5	Fiscaliz. Ambiental 1a. Fase Proy. Vial (BO-0036)		x	x	x	x	X	x	x	x	x												
	Fisc. Amb. 2a. Fase Proy. Vial										x	x	x	x	x								

Notas:

1. Las actividades de Sup. Amb., Interacción Social y Fisc. Amb. de la 2a. Fase del Proyecto Vial deberán ser financiadas como parte del mismo

2. Excepto actividades financiadas con recursos retirados del Fondo en Fideicomiso (FF)

## **8. Mitigación de Impactos durante la Construcción**

- 3.56 Los contratistas de construcción del SNC ejecutarán las medidas y obras requeridas para la mitigación de los impactos de construcción. Estas acciones, de cumplimiento obligatorio, son con cargo a los presupuestos de construcción de cada tramo.
- 3.57 La Supervisión Ambiental de las operaciones de construcción en todo el Corredor estará a cargo de un equipo profesional vinculado a la Gerencia Socio-Ambiental del SNC, con financiamiento del Proyecto durante la 1ª fase de las obras. El equipo profesional será compuesto por un supervisor ambiental, un especialista social, 2 inspectores ambientales, 3 promotores sociales y consultores para temas específicos. La implementación de las acciones de información e interacción social también estará a cargo de este equipo. El Plan Operativo acordado entre el GdB y el Banco describe los procedimientos de gestión ambiental de obra que regirán las relaciones entre la Fiscalización de Obra del SNC, la Supervisión de Ingeniería, la Supervisión Ambiental y los Contratistas.
- 3.58 El Proyecto financiará la actuación del MDSP/VMARNDF, la autoridad ambiental competente respecto del Proyecto Vial, para efectuar la Fiscalización Ambiental de las operaciones de construcción, en todo el Corredor, durante la 1ª fase de obras. El equipo profesional estará compuesto por un fiscal ambiental, 2 inspectores ambientales, un inspector social, consultores y personal de apoyo.
- 3.59 La UEP apoyará la capacitación específica del personal de la Supervisión Ambiental y del equipo de Fiscalización Ambiental a través de una consultoría especializada que preparará los instrumentos técnicos para la gestión ambiental de las operaciones de construcción y brindará entrenamiento a esos profesionales.

## **D. Evaluación y Seguimiento**

- 3.60 El MDSP/UEP será responsable del seguimiento y evaluación del Proyecto, que comprenderá: (i) el seguimiento y supervisión de las diferentes acciones y actividades del Proyecto; y (ii) el control de utilización de los recursos por el Fondo Indígena y las Fundaciones FUNDESNAP y PUMA. Los co-ejecutores deberán presentar la información adicional que razonablemente soliciten el MDSP y el Banco.
- 3.61 Durante el plazo de ejecución del Proyecto, la UEP consolidará y presentará al Banco Informes Técnicos Trimestrales de avance del Proyecto dentro de los 15 días siguientes a cada trimestre. El contenido de esos informes se detalla en el Plan Operativo del Proyecto acordado con el Banco. Para eso, el SNC y las demás entidades co-ejecutoras enviarán con anterioridad sus informes a la UEP. El calendario de visitas del auditor socio-ambiental será ajustado de tal forma que ese profesional certifique el informe técnico trimestral de la UEP, y las informaciones específicas de cada programa.



- 3.62 Durante el plazo de ejecución del Proyecto, el MDSP/UEP deberá presentar al Banco informes anuales sobre el estado de avance de cada componente del Proyecto. Dichos informes deberán ser presentados a más tardar noventa días después de concluido cada año calendario. El avance de cada componente deberá ser comparado con metas cuantificables previamente determinadas. Estos informes deberán ser elaborados por el MDSP/UEP en coordinación con los co-ejecutores y entre otros, deberán incluir lo siguiente: (i) reseña de lo realizado durante el año en comparación con el plan de trabajo; (ii) análisis del cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Préstamo, el Marco Lógico acordado con el Banco y los correspondientes POA; (iii) lista de las actividades por componente y evaluaciones de adquisiciones y contratación de consultores para el periodo; y (iv) evaluación de los indicadores de desempeño y progreso establecidos para cada componente en el Marco Lógico.
- 3.63 El MDSP/UEP deberá reunirse trimestralmente con el Banco para analizar el avance del Programa en cada uno de sus componentes sobre la base de los informes a los que se refiere el párrafo anterior y los indicadores del Marco Lógico.
- 3.64 Si como resultado de estas reuniones se determina que es necesario introducir ajustes en el Proyecto, el MDSP/UEP deberá tomar las medidas apropiadas para corregir las deficiencias identificadas. Para este fin, la UEP deberá presentar al Banco dentro de los 60 días siguientes a la finalización de la reunión, las medidas correctivas que se implementarán y el cronograma para la ejecución de las mismas. Estas obligaciones deberán ser incluidas por el MDSP/UEP en los convenios y en los contratos de gestión que suscriba con las Entidades Co-ejecutoras, Beneficiarias y Administradoras del Proyecto, según corresponda.
- 3.65 Los POA anuales de los subprogramas y actividades del Proyecto serán presentados al Banco durante el plazo de ejecución del Proyecto, según se establece en este documento. La presentación deberá efectuarse a más tardar el 1º de noviembre de cada año y comprenderá una rendición de cuentas de lo cumplido durante el presente año, así como el POA propuesto para el año siguiente.
- 3.66 Para efectos de la presentación al Banco de los informes, POA y estados financieros del Proyecto, se establece que, en su preparación, deberán tomar en consideración el plazo de ejecución específico de cada subprograma y actividad del Proyecto.
- 3.67 En caso de incumplimiento por parte de las entidades administradoras de los Fondos de Fideicomiso y de SERNAP y la Superintendencia Forestal (estas dos últimas instituciones denominadas en su conjunto Entidades Coejecutoras Principales) de los términos y condiciones de ejecución de los Subprogramas de Desarrollo Organizativo, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques, respectivamente, establecidos en el Contrato de Préstamo y en los contratos de gestión y de fideicomiso, se aplicarán las siguientes sanciones, que serán incluidas también en dichos documentos, según corresponda:

- a. Para las entidades administradoras de los Fondos de Fideicomiso, en caso de incumplimiento se les otorgará 30 días para corregir la situación identificada. De no ser corregida dicha situación en ese período, el MDSP le exigirá la devolución del financiamiento cuestionado, le revocará su carácter de administrador del Fondo de Fideicomiso pertinente y entregará todos los recursos recibidos de dicha entidad, en concepto de devolución de los recursos del financiamiento cuestionado y los en fideicomiso, a otra entidad administradora de los Fondos de Fideicomiso seleccionada por el MDSP con el acuerdo previo del Banco. Para el efecto, el contrato de fideicomiso deberá contener entre sus causas de extinción la facultad del fideicomitente de poder extinguir el fideicomiso por esta causa. Es decir, cuando se le revoca la calidad de tal.
- b. Para las Entidades Coejecutoras Principales, en caso de incumplimiento dentro de los primeros 4 años y medio contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo, se les otorgará 30 días para corregir la situación identificada. En caso que dicha situación no haya sido corregida en este plazo, se le suspenderán todos los desembolsos. Si dicha situación no es posteriormente corregida dentro de un período razonable previamente acordado entre la Entidad Coejecutora Principal afectada y el MDSP, todo financiamiento asignado a dicha entidad coejecutora será cancelado y está deberá devolver al fideicomiso los recursos del financiamiento cuestionado, conforme a dictamen de auditoría especial y/o específica contratada para tal efecto. Como consecuencia de esto, en el caso de los Subprogramas de Manejo de Areas Protegidas y de Conservación de Bosques, tanto los recursos devueltos del financiamiento cuestionado como los recursos que estuvieren asignados para la Entidad Coejecutora Principal inelegible serán devueltos al MDSP, para que los mismos sean reasignados dentro del Proyecto, con el previo acuerdo del Banco y del Prestatario. Para el efecto, se revocará previamente el fideicomiso. El contrato de fideicomiso deberá contener entre sus causas de extinción la facultad del fideicomitente de poder extinguir el fideicomiso por esta causa. Es decir, por incumplimiento de la Entidad Coejecutora Principal con sus obligaciones según los términos y condiciones establecidos en este Proyecto.
- c. Para las Entidades Coejecutoras Principales, en caso de incumplimiento después de los primeros 4 años y medio contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo, todo incumplimiento se penalizará con la cancelación de todo financiamiento que estuviere asignado para dicha entidad coejecutora y la devolución al fideicomiso de los recursos del financiamiento cuestionado. Como consecuencia de esto, en el caso de los Subprogramas de Manejo de Areas Protegidas y de Conservación de Bosques, tanto los recursos devueltos del financiamiento cuestionado como los recursos que estuvieren asignados para la entidad coejecutora inelegible serán devueltos al Prestatario. Para el efecto, se revocará previamente el fideicomiso. El contrato de fideicomiso deberá contener entre sus causas de extinción la facultad del fideicomitente de

poder extinguir el fideicomiso por esta causa, como se indica en el párrafo b. anterior.

- 3.68 Dado el carácter novedoso y la complejidad de esta operación, durante la etapa de ejecución del proyecto, el Equipo de Proyecto del BO-0033, juntamente con el Equipo de Proyecto del BO-0036 y en coordinación con COF/CBO, realizará Misiones Administrativas semestrales para el seguimiento al Proyecto. Tales misiones se reunirán cada tres años con el CPC, el CCS para hacer una evaluación de medio término del Proyecto.

#### **E. Ejecución Financiera y Control Contable y Financiero del Proyecto**

- 3.69 El MDSP/UEP recibirá los recursos del préstamo del Banco y tendrá el control de los aportes de la contrapartida nacional. Además tendrá la responsabilidad de su correcta aplicación y entrega a los co-ejecutores y FF conforme los diferentes rubros establecidos en el plan de financiamiento. Para este efecto, solicitará información sobre las transacciones realizadas y visitará periódicamente a las entidades señaladas, de conformidad con el cronograma a ser establecido de común acuerdo con el Banco.
- 3.70 El MDSP/UEP entregará a las entidades administradoras el total de los recursos asignados a los FF de una sola vez, cuando el préstamo sea declarado elegible para desembolso, para constituirlos. Los recursos serán destinados a las acciones y funciones particulares de su responsabilidad y competencia dentro de su participación en el Proyecto.
- 3.71 Asimismo, las entidades administradoras deberán presentar los poderes otorgados a sus representantes legales encargados de firmar el documento de fideicomiso y se obligarán jurídicamente a los correspondientes Fondos, además deberá informar la nómina de funcionarios autorizados para el manejo de la cuenta corriente respectiva. Previa a la entrega de recursos a los FF, los administradores presentarán al MDSP/UEP la documentación legal que respalde y garantice su funcionamiento de acuerdo con las leyes nacionales.
- 3.72 Los FF serán abiertos en bancos radicados en Bolivia y denominados en dólares de los Estados Unidos de América. Para este propósito, el administrador respectivo seleccionará a las entidades bancarias mejor calificadas de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y licitará entre ellas la apertura del fideicomiso. La entidad bancaria que ofrezca las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad será la adjudicataria del fideicomiso. En los Contratos de Fideicomiso deberá incluirse la opción de que los recursos en los Fondos de Fideicomiso podrán ser invertidos en Bonus del Tesoro General de la Nación.
- 3.73 Para los otros co-ejecutores, los desembolsos se realizarán mediante el Fondo Rotatorio establecido para tal efecto, en forma de adelantos o reembolsos, cada vez que requieran recursos y presenten los documentos de respaldo necesarios para cada caso en particular. (¶ 3.89)

- 3.74 El Ejecutor será responsable ante el Banco por: (i) la implementación y mantenimiento de sistemas adecuados para la administración de los contratos, la administración contable-financiera y el control interno para el manejo de los recursos del Programa de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 7.01 de las normas generales de los contratos de préstamos; (ii) la presentación de las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos de acuerdo a los requerimientos del Banco; (iii) la presentación de informes semestrales sobre el Fondo Rotatorio dentro de los sesenta (60) días del cierre de cada semestre; (iv) la preparación y presentación de los informes financieros consolidados del Programa y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco; y v) el mantenimiento de cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local. Asimismo, en los convenios que el Ejecutor acuerde con los co-ejecutores, se incluirá la obligación de los co-ejecutores de: (i) prestar rendición de cuentas al Ejecutor de los recursos recibidos y preparar los informes financieros que sean solicitado ; (ii) mantener adecuados registros contables y financieros del uso de los recursos del Programa; (iii) mantener debidamente archivada la documentación comprobatoria de contrataciones y gastos efectuados con recursos del financiamiento y de la contrapartida y mantenerla disponible para revisión por parte de los auditores externos y/o personal del Banco; y (iv) mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local
- 3.75 Los bienes adquiridos con recursos del Proyecto serán mantenidos de acuerdo con las “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” del Estado (D.S. 25964 del 21 de octubre de 2000)
- 3.76 El MDSP/UEP tendrá la obligación de revisar la documentación remitida en los siete días hábiles siguientes a su recepción e informar al Banco acordemente. Asimismo, el MDSP/UEP realizará visitas de supervisión y seguimiento “in situ” con una periodicidad mensual para los co-ejecutores y bimensual para los administradores de los FF.
- 3.77 Todas las contrataciones de empresas y consultores especializados disponen de borradores de términos de referencia en el Plan Operativo del Proyecto, acordados entre el Gobierno y el Banco. El Anexo II presenta el Plan de Adquisiciones.
- 3.78 Para tornar viable la implantación oportuna de las medidas socio-ambientales, antes de comenzar la construcción de la carretera, el Banco acordó que el Ejecutor, y algunos co-ejecutores, inicien la contratación y ejecución de ciertos servicios prioritarios antes de la presentación de la operación al Directorio del Banco, de la firma del Contrato de Préstamo, o de la elegibilidad para desembolso. Los costos de los servicios contratados son, en su mayoría, con cargo al Proyecto ATR 929/SF-BO.

## **F. Auditorías**

### **1. Auditoría Socio-Ambiental Independiente**

- 3.79 . El Proyecto contará con un auditor socio-ambiental independiente que verificará trimestralmente el cumplimiento de las normas y procedimientos socio-ambientales acordados, el avance de las actividades y acciones establecidas y los resultados alcanzados, por parte de los actores involucrados. (¶ 3.16)

### **2. Auditoría Externa**

- 3.80 Durante la ejecución del Proyecto, el Ejecutor deberá presentar anualmente al Banco y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal los estados financieros anuales del Proyecto, auditados por una firma privada de auditores independientes de acuerdo a los requerimientos del Banco. Adicionalmente, el Ejecutor presentará al Banco dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada semestre un informe semestral sobre la auditoría operacional y financiera del Proyecto, la cual incluirá las auditorías de los FF relacionadas con el Proyecto. Los términos de referencia para las auditorías serán previamente aprobados por el Banco.
- 3.81 En la selección y contratación de la firma de auditoría se utilizarán los procedimientos del Banco para licitación de firmas de auditoría. Se recomienda la contratación del auditor por un período mínimo de 3 años, sujeta a una cláusula de terminación del contrato por eventual desempeño inadecuado. El mismo auditor será responsable por los trabajos de auditoría externa y los costos de la auditoría serán financiados con recursos del préstamo del Banco.

## **G. Adquisiciones**

- 3.82 Se aplicarán los procedimientos estándares del Banco para la adquisición de bienes, y para la ejecución de obras del Proyecto. Se recurrirá a procedimientos de licitación pública internacional cuando se utilicen los recursos del financiamiento del Banco para la adquisición de bienes cuyo valor sea igual o superior al equivalente de US\$ 350.000 y la contratación de obras cuyo valor sea igual o superior al equivalente de US\$ 3.000.000.
- 3.83 La adquisición de servicios de consultoría se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos estándares del Banco para estos propósitos y los procedimientos indicados en el Documento GN-1679-3. Para la adquisición de servicios de consultoría cuyo valor sea igual o superior a US\$ 200.000, se utilizará concurso público internacional. Para este Proyecto, en caso de utilizar Selección Basada en la Calidad y Costo para firmas consultoras, el peso relativo del precio como criterio de evaluación no superará el 20% y el elemento técnico o de calidad de oferta no podrá ser menor al 80%
- 3.84 Cabe señalar que la Fundación Trópico Húmedo estará sujeta a los procedimientos estándares del Banco para adquisición de bienes y ejecución de obras aplicables a

instituciones del sector público. Esta entidad estará también sujeta a la legislación local aplicable al sector público, para los casos de adquisición de bienes y ejecución de obras por debajo de los montos arriba mencionados, para los que la política del Banco requiere licitación pública internacional. El Prestatario se comprometerá a fiscalizar a esta entidad, por intermedio del Organismo Ejecutor, como si fuera institución del sector público, en lo relativo a la utilización de los procedimientos y de la legislación indicados en este párrafo. Esta será una condición contractual de ejecución del Proyecto. El Plan de Adquisiciones del Proyecto deberá ser actualizado cada seis meses por el Ejecutor.

#### **H. Estado de Preparación del Proyecto**

- 3.85 Conforme lo mencionado anteriormente el Proyecto cuenta con los siguientes estudios y documentos que fueron desarrollados por firmas consultoras bajo la supervisión del Equipo de Proyecto: (a) Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica; (b) Plan Operativo del Proyecto que describe en detalle cada uno de los programas y subprogramas incluidos en el mismo.
- 3.86 El Plan Operativo incluye: (a) el detalle de todas las acciones a ser ejecutadas; (b) el esquema institucional de ejecución; (c) el presupuesto detallado; (d) el cronograma de ejecución detallado; (e) los borradores de convenios a ser firmados con los co-ejecutores del Proyecto; (f) los borradores de Reglamentos Operativos de los fondos de fideicomiso a ser creados en los subprogramas de Desarrollo Organizativo Indígena, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques; y (g) los TdR para la contratación del personal que va a conformar la UEP. Como condición previa al primer desembolso se ha solicitado la presentación de la versión actualizada del Plan Operativo aprobada por el Banco.

#### **I. Plazos de Ejecución y Desembolso**

- 3.87 El plazo de ejecución del Proyecto será de 10 años, contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo, para la Unidad Ejecutora del Proyecto, las auditorías Financiera y Socio-ambiental y los Subprogramas de Desarrollo Organizativo, Manejo de Áreas Protegidas y Conservación de Bosques y será de 4½ años para los demás Subprogramas y actividades del Proyecto (ver tabla III-3 sobre el cronograma detallado de Ejecución).
- 3.88 El plazo de desembolsos del Proyecto será de 10 años, contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo, para la Unidad Ejecutora del Proyecto y las auditorías Financiera y Socioambiental, y será de 4½ para los demás Subprogramas y actividades del Proyecto (ver tabla III-2 sobre el cronograma detallado de Desembolso).

#### **J. Fondo Rotatorio**

- 3.89 Se propone la constitución de un fondo rotatorio por un monto de hasta 10% del monto del Préstamo del Banco. Esto se justifica considerando el gran número de

componentes con que cuenta el Proyecto, así como el gran número de entidades co-ejecutoras.

#### **IV. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO**

- 4.1 Este Proyecto tiene características únicas, por incorporar un conjunto de acciones destinadas a dar soporte ambiental y social a una región ambientalmente sensible que será afectada por un proyecto de infraestructura, la construcción y mejoramiento de la Carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que generará una importante expansión de la frontera agropecuaria y la explotación forestal. Su ejecución supone impactos ambientales y sociales positivos, si los programas previstos son implementados en las fechas y forma establecidas. Este Proyecto incluye todas las acciones de mitigación ambiental y cubre todos los costos correspondientes a los impactos indirectos que ocasione la mejora de la Carretera Santa Cruz – Puerto Suárez ocasionará. Con relación a los impactos directos (los programas del PPM-PASA), este Proyecto incluye todas las acciones de mitigación ambiental y cubre todos los costos correspondientes a la 1ª fase de obras del Proyecto Vial. Las acciones de mitigación de impactos directos referentes a la 2ª fase de obras deberán ser financiadas por la 2ª fase del Préstamo BO-0036, siguiendo criterios uniformes a los adoptados para este Proyecto.
- 4.2 La EAE del Corredor identificó impactos positivos en la implantación de este Proyecto. El Plan de Acción tendrá una repercusión estructural en la región del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez. Su objetivo es contribuir a recuperar el medio ambiente afectado y promover el desarrollo sostenible de la región. Esto se hará a través de los programas de desarrollo social y ambiental que precederán las obras de la carretera y ayudarán a ordenar el crecimiento de la región. Además, el área de influencia del Proyecto abriga poblaciones con alto grado de fragilidad social y económica, que se beneficiarán con el ordenamiento territorial propuesto por el Proyecto.
- 4.3 Las obras de mejora y construcción de la carretera tendrán impactos negativos localizados sobre la biodiversidad y los recursos naturales de la región, al producir fenómenos erosivos, cambios en el uso del suelo, deforestación y la extinción de fauna silvestre en el área directamente afectada por la carretera. La mitigación de estos impactos negativos, identificados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Carretera, también fue considerada en los programas del Proyecto.
- 4.4 En síntesis, el Proyecto de Protección Ambiental y Social propuesto contribuirá para: (a) asegurar los derechos de propiedad de la tierra de comunidades indígenas, campesinas y pequeños propietarios, evitando los riesgos de exclusión social; (b) asegurar el ordenamiento territorial y evitar la posibilidad de conflictos de tenencia de la tierra y uso de recursos naturales, mediante una apropiada titulación y ordenamiento predial; (c) disciplinar la expansión de la frontera de ocupación económica, reduciendo el potencial de deforestación inducido por la carretera y protegiendo áreas sensibles y hábitats críticos; (d) mejorar de manera sustancial los mecanismos de protección y gestión de las áreas protegidas, y el manejo sostenible de los recursos de bosques; (e) proporcionar mayores incentivos y un marco normativo adecuado para el uso sostenible de los recursos naturales; (f) mejorar notablemente la capacidad de coordinación y gestión de los aspectos socio-ambientales, dentro de un marco de participación amplia; y (g) promover la



autogestión y sostenibilidad a largo plazo de las entidades de manejo de áreas protegidas y bosques.

- 4.5 El Proyecto cuenta con una serie de soluciones eficientes para alcanzar los objetivos de: (i) apoyar la conservación ambiental sostenible a largo plazo; (ii) contribuir para que el desarrollo económico ocurra sin los grandes costos que representarían la futura ocupación desordenada del territorio, la explotación equivocada y el agotamiento de los recursos naturales (suelos, bosques, hídricos), y (iii) propiciar la continuidad de las actividades económicas y sistemas de producción social de las comunidades. Si el Proyecto Vial carece de estas medidas mitigadoras, los costos sociales y económicos serán, como la experiencia lo indica, extremadamente elevados.
- 4.6 Los principales beneficios asociados con la regularización de la tenencia de la tierra son la mejora en la administración de derechos de propiedad predial y regulación sobre uso de suelos proporcionando una mayor seguridad jurídica que brindará incentivos para el uso sostenible del recurso tierra, y la mejora de los sistemas de registro y catastro que permitirá mayor efectividad en la recaudación del impuesto predial, principal fuente de ingreso de los municipios. Asimismo, se espera que la clarificación de los derechos de propiedad sobre la tierra reduzca las distorsiones de uso del recurso y contribuya tanto a reducir la distribución desigual de la tierra en el país como a aliviar la pobreza en las áreas rurales, al permitir a los sectores más pobres el acceso a activos físicos.
- 4.7 El diseño de las actividades de saneamiento, titulación y registro de predios rurales tomó en cuenta cambios recientes en los procedimientos desarrollados por el INRA. Sobre la base de estos cambios, se estimó la mayor eficiencia del personal de campo y de oficina que realizará esta actividad, tomando en cuenta las características geográficas de los 7,2 millones de hectáreas a ser saneadas, el tamaño promedio de predios y la facilidad de acceso. El costo unitario total del proceso de saneamiento se estima en US\$ 0,67 /ha, representados en costos unitarios directos de US\$ 0,55 /ha de y de supervisión y gerencia de US\$ 0,12 /ha. Asimismo, los cambios en los procedimientos permitirán la reducción del tiempo efectivo de procesamiento de 3,5 años a 22 meses.

#### **A. Viabilidad Técnica**

- 4.8 Tratándose de un proyecto socio-ambiental, es evidente que las acciones definidas traerán beneficios para el medio ambiente, en comparación con la hipótesis de su no-ejecución. La viabilidad ambiental del Proyecto está relacionada con dos aspectos: (i) el grado de eficacia de las medidas para alcanzar los resultados esperados; y (ii) la sostenibilidad de la protección ambiental a largo plazo.
- 4.9 La clarificación de los derechos de propiedad de la tierra en el área de influencia del Proyecto Vial permitirá minimizar impactos ambientales y sociales que de otra forma ocurrirían al expandirse las actividades agropecuaria y forestal como resultado de la reducción de los costos de transporte. Los impactos a minimizarse son: (i) el impacto que sobre la biodiversidad y sobre zonas ambientalmente

frágiles que puede ocasionar la expansión de la frontera agraria, y (ii) el impacto que sobre la distribución de la riqueza puede ocasionar la incapacidad de los ocupantes de las tierras de apropiarse de los beneficios económicos asociados al aumento del precio de la tierra resultante.

- 4.10 La estrategia de conservación adoptada actuará en varios frentes: (i) clarificando los derechos de propiedad sobre la tierra y retornando grandes extensiones de tierras fiscales aptas para manejo forestal al Estado; (ii) ordenando la ocupación del territorio; (iii) fortaleciendo la fiscalización de bosques y controlando el desmonte ilegal; (iv) fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas, especialmente las tareas de protección; y (v) promoviendo prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- 4.11 El marco legal Boliviano desincentiva la deforestación de tierra por parte de quienes desean demostrar ocupación, constituyéndose en un apoyo para el esfuerzo de conservación del proyecto. Los requisitos para demostrar el uso legítimo de un predio incluyen la presentación de contratos de personal asalariado, el registro de ganado o la autorización del ejercicio de actividades forestales o de conservación sin requerir demostrar “mejoras” del terreno (i.e., deforestación). Adicionalmente, se respetarán áreas protegidas y TCO durante el saneamiento y titulación al exigirse que durante el levantamiento de información secundaria y previo a las pericias de campo: (i) se tome en cuenta los resultados del diagnóstico de tenencia de la tierra para las áreas protegidas Otuquis y San Matías; (ii) se hayan culminado los procesos de saneamiento de TCO y comunidades indígenas en el AID; y (iii) se identifiquen en mapas base las áreas protegidas y zonas ambientalmente sensibles.
- 4.12 Para lograr los objetivos, está previsto que el Proyecto financie acciones de protección dentro de un horizonte de mediano plazo. Después, gradualmente, las instituciones deberán lograr viabilidad financiera para asumir los costos de protección ambiental en forma integral a partir de 2012. Por tanto, la sostenibilidad a largo plazo es perfectamente factible, pero está por fuera del radio de acción de este Proyecto. El fortalecimiento del SNAP mediante el Proyecto GEF-II y los esfuerzos de la SIF para crear mecanismos estables de financiación, son iniciativas paralelas de gran importancia para alcanzar ese objetivo.
- 4.13 La estrategia es consistente y capaz de producir resultados efectivos en términos de protección ambiental. Sin embargo, considerando que las acciones programadas apuntan a establecer tan sólo un nivel “mínimo adecuado” de protección, la eficacia real dependerá mucho del balance entre: (i) la intensidad de la presión de ocupación (que suele responder a impulsos externos a la región, no controlables); y (ii) la calidad de la fiscalización y de la gestión territorial-ambiental que las entidades consigan establecer.
- 4.14 La ejecución de los programas que componen el Proyecto no presenta dificultades técnicas o gerenciales especiales. Bolivia cuenta con empresas y profesionales que disponen de experiencia en trabajos similares. Dos ejemplos recientes de proyectos donde se implementaron programas socio-ambientales similares, son los gasoductos al Brasil.

- 4.15 En términos de costos, los programas están dimensionados con base en parámetros de productividad y costos unitarios típicos del país. Los presupuestos son ajustados pero perfectamente realizables con un sistema efectivo de gerencia y control.
- 4.16 El Sistema de Gerencia del Proyecto incluye una Unidad Ejecutora, con profesionales y consultores especializados, que proveerá agilidad, eficiencia y conocimiento técnico en diversas áreas para facilitar la ejecución del Proyecto.

**B. Viabilidad Socioeconómica e Impacto sobre la Pobreza**

- 4.17 El Proyecto fue ampliamente discutido con los más diversos sectores de la sociedad y existe el apoyo generalizado para lograr su concreción. De hecho, tanto la carretera como las medidas socio-ambientales propuestas viabilizan antiguas reivindicaciones de la población de la región. La concertación lograda y los diversos mecanismos de consulta utilizados dan legitimidad al Proyecto y todos los programas.
- 4.18 Un aspecto importante que es parte central del Proyecto es el grado de eficacia de las medidas para limitar la exclusión social y promover una distribución más equitativa de los beneficios del Corredor.
- 4.19 La modalidad de saneamiento que se utilizará fue consultada con un amplio número de representantes de la sociedad civil, incluyendo aquellos de organizaciones indígenas. El diseño participativo fue discutido en detalle y las experiencias piloto fueron puestas en práctica por organismos no gubernamentales en combinación con el INRA. Las campañas públicas de divulgación de los alcances, beneficios y plazos del proceso de saneamiento previas a las pericias de campo, así como la exposición pública de resultados, son obligatorias de acuerdo al reglamento de la Ley para garantizar la transparencia del proceso. La participación por igual de hombres y mujeres en la ejecución de los procedimientos de saneamiento, está abierta y garantizada de acuerdo a la normativa legal.
- 4.20 Las acciones del Proyecto serán ampliamente positivas para los sectores sociales más vulnerables ya que el Proyecto actúa en diversos frentes para fortalecer la capacidad social de respuesta a los nuevos desafíos. Por ello se considera que este Proyecto califica como un proyecto que promueve la equidad social (SEQ) como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el Informe sobre la Octava Reposición (Documento AB-1704), ya que busca: (i) asegurar el derecho propietario sobre la tierra a campesinos e indígenas; (ii) reponer las pérdidas a los directamente afectados, en calidad superior a la condición presente; (iii) fortalecer la capacidad de funcionamiento y el desarrollo organizativo de las centrales indígenas de base; (iv) apoyar la conservación ambiental, que es esencial para la continuidad del sistema de reproducción social de las comunidades autóctonas; (v) capacitar a los gobiernos municipales para que puedan lidiar mejor con las nuevas demandas sociales y responsabilidades; (vi) capacitar a las organizaciones sociales para mejorar la calidad de la participación

ciudadana; y, en especial, (vii) asegurar espacios de participación institucionalizada en la gestión de los programas.

- 4.21 La Ley 1715 (Ley INRA) establece la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil. El INRA ha tomado acciones para fortalecer la participación de las mujeres en el proceso de titulación y saneamiento a través de (i) la emisión de un instructivo al departamento de titulación y a las unidades de saneamiento para incluir un espacio adecuado para dos personas en los títulos ejecutoriales, y (ii) la inclusión de los nombres de todas las personas en posesión de una propiedad, aunque la pareja no esté formalmente casada.
- 4.22 La política OP710 del Banco hace parte integral del diseño de las medidas de reasentamiento involuntario y por lo tanto garantiza la equidad de los programas.

### **C. Viabilidad Institucional**

- 4.23 Los organismos ejecutores fueron hechos partícipes en la preparación del Plan Operativo de los programas, logrando que las diversas instituciones se hayan mostrado favorables a su ejecución. En casi todos los casos, los organismos ejecutores tienen esas actividades precisamente como su misión institucional, y el Proyecto viene a complementar recursos para lograrlo. Por tanto, los cambios normales de dirigentes no deben constituir un obstáculo insalvable para la continuidad de la ejecución de los programas. Los programas administrados directamente por la UEP gozarán de mayor estabilidad.
- 4.24 La ejecución de la totalidad de los planes exigirá a muchas de las entidades responsables, gubernamentales y sociales, una capacidad de respuesta bastante más alta que aquella de la cual disponen actualmente. La contratación de personal y consultores especializados para apoyar la implantación de las actividades previstas contribuirá para asegurar la coordinación necesaria y capacitación técnica para las varias etapas del Proyecto.
- 4.25 Un aspecto crítico es la capacidad de articulación entre los ejecutores de los programas, muchas veces perjudicada por antagonismos político-partidarios. Ese riesgo existe, principalmente en un proyecto de varios años de duración, pero se evalúa que se lo ha minimizado mediante un diseño que requiere pocas interfases entre los programas. En un escenario de mayores antagonismos, el Proyecto puede alcanzar un éxito razonable sólo asegurando que cada entidad ejecutora cumpla su parte. En un escenario de mayor cooperación, los resultados pueden ser extremadamente positivos.
- 4.26 Todos los programas están enmarcados dentro de una serie de convenios que serán firmados entre el MDSP y las diferentes entidades que actúan como co-ejecutoras y tienen bajo su cargo el desarrollo de los mismos. Los borradores de los convenios donde se definen responsabilidades, ya han sido preparados y forman parte del Plan Operativo del Proyecto, acordado con el gobierno boliviano.

- 4.27 Varias de las principales entidades ejecutoras han pasado recientemente por un proceso de institucionalización (INRA, Superintendencia Forestal), tienen autonomía administrativa, sus dirigentes son designados a través de concurso público y gozan de mayor estabilidad. El SNC y SERNAP también deben completar próximamente su institucionalización. Esto constituye un importante factor de seguridad institucional.
- 4.28 El interés de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación efectiva de los programas, y su capacidad de hacerse oír en el escenario internacional, también impulsará a las instituciones a cumplir su cometido.

#### **D. Viabilidad Financiera**

- 4.29 Los programas, en general, requieren muy poca asignación de recursos propios por parte de las entidades ejecutoras. En la mayoría de los casos, el propio sistema de gerencia de los programas y los costos de operación son financiados por el Proyecto. Así, los problemas financieros habituales en los organismos de la administración pública no deben constituir un obstáculo insalvable para la continuidad de la ejecución de los programas.
- 4.30 El Programa de Reposición de Pérdidas es el único programa que requiere una contraparte de recursos importante del Estado Boliviano, para el pago de indemnizaciones (con cargo al Préstamo BO-0036). El Gobierno Nacional se comprometió a confirmar la existencia de esos recursos en el presupuesto de la Prefectura de Santa Cruz para 2002.

#### **E. Riesgos del Proyecto**

- 4.31 Los principales riesgos del Proyecto han sido analizados. El Proyecto identificó una serie de mecanismos de seguridad para reducir su probabilidad de ocurrencia y/o sus consecuencias. Los riesgos principales se detallan a continuación.
- 4.32 Escasa capacidad institucional de los organismos públicos (y privados) encargados del desarrollo de las distintas actividades: Para incrementar dicha capacidad, los programas prevén acciones específicas de fortalecimiento institucional, abarcando la complementación del personal técnico y administrativo de las instituciones y las condiciones materiales para el ejercicio de sus funciones.
- 4.33 Falta de interés en la ejecución del Proyecto: El próximo gobierno puede no empeñarse en la ejecución del Proyecto, especialmente después de asegurados los recursos para la construcción de la carretera. Este riesgo será minimizado: (i) concentrando la ejecución de las principales medidas socio-ambientales antes del inicio de la obra o en los primeros meses, y (ii) estableciendo cláusulas en el contrato de préstamo del BO-0036 que asocien los desembolsos al cumplimiento de metas razonables de avance de los programas socio-ambientales. Si bien los financiamientos para otros tramos de la carretera son independientes del BO-0036, los acuerdos entre el GdB y el Banco incluyen adoptar los mismos estándares

socio-ambientales en toda la carretera, y, además, los tramos financiados por el Banco son esenciales para la funcionalidad del Corredor. De todas maneras, la relación de cooperación del Banco con el país es permanente, y otras soluciones podrán ser negociadas para asegurar la implementación completa del Proyecto.

- 4.34 Riesgo de que ocurran incidentes sociales o ambientales de gran repercusión internacional, que comprometan la imagen del País y del Banco: El Proyecto ha sido diseñado de forma participativa y contiene todas las medidas de prevención y control necesarias. Este riesgo está siendo minimizado estableciendo un sistema confiable de gestión, con participación social, para prevenir y resolver los conflictos antes que éstos asuman proporciones mayores.
- 4.35 Riesgo de que ocurran modificaciones en el marco legal: (Ley Forestal, Medio Ambiente y Ley INRA) como las comprometidas en los acuerdos de octubre del 2000, y que eso dificulte la implementación oportuna de programas importantes. Esta situación está latente y puede ocurrir. Este riesgo será minimizado dado que los compromisos contractuales preceden posibles cambios en la legislación. Por otra parte, el establecimiento de metas en los programas, ligados a desembolsos, disminuye este riesgo.
- 4.36 Riesgo de inestabilidad institucional, que lleve a modificaciones importantes en algunos de los principales organismos ejecutores: El actual marco legal e institucional se ha consolidado después de muchos años de arduos esfuerzos de concertación entre los distintos sectores y grupos de interés, con apoyo de la cooperación internacional. El establecimiento de metas en los programas, ligados a desembolsos, disminuye este riesgo.
- 4.37 Riesgo de que no se lleve a cabo o se postergue el proyecto vial y que el derecho de vía que haya sido titulado como tierra fiscal sea nuevamente ocupado por invasores.

**MARCO LÓGICO**  
**PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL CORREDOR SANTA CRUZ – PUERTO SUÁREZ**  
**(BO-0033)**

<b>Objetivo del Proyecto</b>	
Influencia de la carretera desarrollada de manera sostenible	Al final de la ejecución del proyecto se ha logrado estabilizar las áreas protegidas de S Matías, Otuquis y Kaa-Iya y no se presentan presiones colonizadoras. Al cabo de diez años, las nueve Comunidades Indígenas apoyadas por el proyecto, se incorporado a la vida económica de la región y han logrado representatividad política.
<b>COMPONENTE I</b> COMPONENTE I - PLAN DE ACCION (Mitigación de Impactos Indirectos)	<b>COMPONENTE II</b> COMPONENTE II - Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación Seguimiento Ambiental (PASA) - (Mitigación de Impactos Directos)
<b>Objetivo</b>	
Indirectos del proyecto vial BO-0036 mitigados	Impactos directos del proyecto vial BO-0036 mitigados
<b>Resultados</b>	
De propiedad de las tierras en el Área de Influencia de seis municipios clarificados Terrales indígenas fortalecidas De Conservación de bosques ejecutado De Manejo de Áreas protegidas ejecutado De Comunicación ejecutado De Gestión Socioambiental lograda	Derecho de vía liberado: población afectada compensada y satisfecha Reliquias/ artefactos arqueológicos recuperados y registrados ante U'NAR Programa de información e interacción social ejecutado Impactos socio-ambientales de las operaciones de construcción minimizados Legislación ambiental cumplida (Gerencia y Gestión Socioambiental lograda)

**MARCO LÓGICO**  
**PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**EN EL CORREDOR SANTA CRUZ – PUERTO SUÁREZ**  
**(BO-0033)**

**COMPONENTE I - PLAN DE ACCION (Mitigación de Impactos Indirectos)**

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Contribuir al desarrollo sostenible del Area de Influencia de la Carretera			
<b>Impactos Indirectos</b>			
Impactos indirectos del proyecto vial BO-0036 mitigados	<p>al final de 10 años el 90° del área de las tres áreas protegidas fue mantenido sin deforestación ilegal e intervenciones externas</p> <p>Al final del Proyecto las centrales indígenas han logrado financiamiento y una TCO está implementando su plan de manejo.</p> <p>Al final del 10° año se espera que en lugar de que se hayan perdido 3 millones de hectareas de bosques solamente se pierde el 50°.</p> <p>Al final del proyecto el 90 ° de las ONGs y <i>stakeholders</i> locales (Departamento de Santa Cruz) se manifiestan satisfechos con el</p>	<p>imágenes satelitales, informes del Programa, informes del auditor</p> <p>encuestas, prensa.</p>	<p>El Gobierno Boliviano apoya en la ejecución del proyecto</p> <p>No se presentan incidentes sociales o ambientales de repercusión</p>
<b>Impactos Directos</b>			
Derechos de propiedad de las tierras del Area de Influencia Directa han sido clarificados	<p>1.1 Al final de la ejecucion del Programa de Saneamiento, Titulación y Registro de Tierras (final de 2004), 100° de la extensión territorial de cada municipio y 100° de cada área protegida ha sido registrada en DDDR como área fiscal o de particulares.</p> <p>1.2 - La duración del proceso de saneamiento hasta la firma de resoluciones finales en el INRA es 22 meses.</p> <p>1.3 -Al final de 2005 ha sido emitida declaración de área sancada para la totalidad de ese territorio.</p>	Registros de INRA y DDDR, informes del auditor ambiental	<p>Participación social se da en forma constructiva y efectiva</p> <p>Capacidad institucional de INRA/DDRR ha sido fortalecida</p>



## COMPONENTE I - PLAN DE ACCION (Mitigación de Impactos Indirectos)

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Programa Indígena ejecutado	Nueve centrales indígenas fortalecidas y operando al cabo de 10 años	Evaluaciones e informes de ejecución del programa	
Subprograma de Conservación de bosques ejecutado	3.1 Al final del Proyecto el 100% de la evaluación de las áreas intervenidas es efectuada utilizando un sistema GIS. Mapas de chequeos y desmontes generados anualmente a partir de imágenes satelitales 3.2 Superintendencia forestal cubre el 100% de sus gastos operativos y de mantenimiento al cabo de 10 años 3.3 En el año de 2004, el desmonte ilegal verificado en el AII es inferior a 50% del área total intervenida (desmonte ilegal + desmonte legal identificado en los mapas en GIS)	Imágenes satelitales, informes del auditor ambiental  Registros contables Superintendencia Forestal, informes del auditor ambiental	La capacidad institucional de Superintendencia Forestal es adecuada para realizar las actividades del Subprograma
Subprograma de Manejo de Áreas protegidas ejecutado	Los incendios provocados, desmontes, invasiones y actividades ilegales dentro del parque disminuyen en un 80% a partir del año 2004	Evaluaciones e informes de ejecución del programa	La capacidad institucional de SERNAP es adecuada para realizar las actividades del Subprograma
Programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Sostenible Municipal ejecutado	5.1 Cada uno de los seis Municipios cuenta con un PLOT al cabo de seis años 5.2 Dos nuevos proyectos fueron implementados en la región siguiendo los modelos demostrativos exitosos al cabo de 4.5 años 5.3 6 proyectos de catastro municipal funcionando al cabo de 4.5 años	Informes de proyecto	Capacidad institucional de los seis municipios ha sido fortalecida Marco institucional estable
Programa de Comunicación ejecutado	6.1 Quejas de ONGs por falta de información se reducen a menos del 10% del año inicial, al cabo de 4.5 años	Registros de la UEP	
(Gerencia y Gestión Socioambiental)			
<b>Costos</b>			
Licitar y contratar firmas para sanear 7.2 millones Ha	\$4.000.000	Registros contables del proyecto	La cartografía básica fue actualizada y el diagnóstico de la tenencia de tierras en las ANMI San Matías y Otuquis fue completado antes del inicio del proyecto.
Sanear de oficio			

## COMPONENTE I - PLAN DE ACCION (Mitigación de Impactos Indirectos)

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Titulación y registro de predios en el área de influencia directa de la carretera Contratación y ejecución de cursos capacitación a funcionarios Adquisición de equipos software SIG/CAT Consolidación de bases de información catastral gráfica y alfanumérica SIG/CAT Instalación de equipos de informática y otros equipos para la modernización de la oficina del DRR en Sta Cruz Instalación las oficinas locales de Roboré y San José del sistema de inscripción de predios en Registro TEMIS	\$1.100.000	Registros contables del proyecto	No hay cambios en la Ley INRA. Ley Forestal ni Ley de Medio Ambiente  Capacidad institucional de los organismos públicos y privados encargados del desarrollo de las distintas actividades fortalecida
Creación de Fondo en Fideicomiso para desarrollo organizativo indígena, a ser administrada por el Fondo Indígena	\$1.6 M depositados en el Fondo antes del final de 2002	Registros contables del proyecto	Contrato de Gestión entre el MDSP y Fondo Indígena vigente y Contrato de Fideicomiso con la Institución Bancaria Fiduciaria firmado
Compra de equipos e instalaciones	\$255.000	Registros contables del proyecto	Voluntad de las centrales indígenas para participar en forma coordinada
Elaboración de Planes de Manejo de TCOs	\$213.110	Registros contables del proyecto	
Instalación y funcionamiento de Unidad Técnica de Gestión del Programa Indígena	\$367.840	Registros contables del proyecto	
Ejecución de tareas de desarrollo organizativo por 9 centrales indígenas, en 2002-2003	\$420.050		
Ejecución de tareas de desarrollo organizativo por 9 centrales indígenas, con recursos del FF	alrededor de \$270.000 por año		
Creación de Fondo en Fideicomiso para conservación de Bosques, a ser administrado por la Fundación PUMA	\$1.5 M dólares depositados en el fondo antes del final de 2002		Contrato de Gestión entre el MDSP, Superintendencia Forestal y Fundación PUMA vigente y Contrato de Fideicomiso con la Institución Bancaria Fiduciaria firmado
Elaboración y aprobación POA			El Gobierno de Bolivia reorganiza las fuentes de recursos para la regulación y control forestal
Instalar y poner en funcionamiento 3 unidades operativas de bosque	\$284.500 en 2 años	Registros contables del proyecto	
Crear un puesto fijo y 2 brigadas móviles	\$169.800 en 2 años	Registros contables del proyecto	
Elaborar y puesta en operación de plan de monitoreo de desmontes e incendios	\$118.800 en 2 años	Registros contables del proyecto	
Ejecución de actividades de regulación y control forestal con recursos del FF	alrededor de \$245.000 por año		

## COMPONENTE I - PLAN DE ACCION (Mitigación de Impactos Indirectos)

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Creación de Fondo en Fideicomiso para apoyo al manejo de áreas protegidas, a ser administrado por FUNDESNA	\$1.97 M dólares depositados en el fondo antes del final de 2002	Registros contables del proyecto	Contrato de Gestión entre el MDSP, SERNAP y FUNDESNA vigente y Contrato de Fideicomiso con la Institución Bancaria Fiduciaria firmado
Contratación de guardaparques, choferes y personal técnico y la operación del control y protección.	\$181.400 en 2003	Registros contables del proyecto	\$2.530.000 de recursos de GEF II son aplicados a las tres áreas protegidas en el periodo 2002 - 2006
Adquisición de equipos para San Matías y Otquis	\$95.000		El Proyecto GEF-II logra alcanzar la sostenibilidad financiera del SNAP a mediano plazo
Elaboración y aprobación de POAs para las 3 áreas protegidas			Capacidad institucional de SERNAP ha sido fortalecida
Ejecución de POAs en las 3 áreas protegidas con recursos del FF	alrededor de \$290.000 al año	Registros contables del proyecto	
Contratación de personal y elaboración de PLOTS municipales y talleres	\$544.440	Registros contables del proyecto	
Contratación de personal y elaboración de subprogramas de agro-pecuario-industriales	\$1.478.820	Registros contables del proyecto	Convenio del MDSP con FDTA Trópico Húmedo vigente
Desarrollo de Acciones Demostrativas			
Elaboración planes de planificación urbana	\$88.980	Registros contables del proyecto	
Elaboración subprograma de catastro urbano	\$170.370	Registros contables del proyecto	
Elaboración subprograma de valorización del patrimonio cultural			
Elaboración de propuesta de desarrollo regional	\$135.000	Registros contables del proyecto	
Licitación y contratación programa de comunicación		Registros contables del proyecto	
Desarrollo del programa de comunicación			
Gerencia del PPAS	\$1.000.000	Registros contables del proyecto	Convenios entre MDSP, Entidades Coejecutoras Principales y Entidad Coejecutora Beneficiaria firmados y en vigencia
Operación comité de participación y consulta	\$110.000	Registros contables del proyecto	
Operación subcomité técnico de tierras	\$18.000	Registros contables del proyecto	
Ejecución de consultas de participación a nivel local	\$130.000	Registros contables del proyecto	

**MARCO LÓGICO**  
**PROYECTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**EN EL CORREDOR SANTA CRUZ – PUERTO SUÁREZ**  
**(BO-0033)**

COMPONENTE II - Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) - (Mitigación de Impactos Directos)

**MARCO LÓGICO**

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Contribuir al desarrollo sostenible del Área de Influencia de la Carretera			
Objetivo			
Impactos directos del proyecto vial BO-0036 mitigados	Un 90% de la población del Área de influencia se manifiesta satisfecha con el desarrollo del proyecto Al final de seis años no se presenta erosión, obstrucción de cauces de los drenajes naturales, ni inundaciones como consecuencia de la construcción de la carretera (tramo Paraíso-San José).		Saneamiento y titulación ejecutados en DDV  No se presentan incidentes sociales o ambientales de repercusión
Factores			
Derecho de vía liberado, población afectada compensada y satisfecha	El 100% de los vecinos, reasentados y comunidades a lo largo del DDV compensados antes del inicio de las obras de la carretera	Encuestas, prensa. Número de demandas legales y retrasos en cronograma de obra	No se presentan presiones políticas en proceso de liberación del DDV.
Reliquias/ artefactos arqueológicos recuperados y registrados ante UNAR	Nuevas piezas o artefactos rescatados del derecho de vía, fueron incorporadas a la casa de la cultura en Roboré, al final de 2 años	Registros de obra, registro de la casa de la cultura en Robore	No se presentan saqueos de material arqueológico
Programa de información e interacción social ejecutado	3.1 95% de las quejas del público atendidas en menos de 5 días	Registros de quejas	

(Gerencia y Gestión Socioambiental)	3.2 Un 80% de la población manifiesta tener conocimiento de la programación de obras	Informes de proyecto	
-------------------------------------	--	----------------------	--

## Actividades

Licitación para contratar firma para ejecución del PRP	\$2,417,950		Desembolsos de fondos de contrapartida se dan oportunamente
Inventario y ejecución del catastro físico y socioeconómico			Firma y ratificación del convenio con INRA y Prefectura de Santa Cruz
Negociaciones, Expropiaciones, y legalización			Saneamiento y titulación ejecutados en DDV
Reasentamientos			Se ejecuta el proyecto vial
Contratación personal para levantamiento arqueológico	\$77,650		
Rescate de patrimonio cultural			
Registro y seguimiento UNAR			
Contratación de empresas para desarrollo de campañas informativas	\$205,700		Señalización de la obra y divulgación cronograma de obra se dan satisfactorios
Divulgación de información por diversos medios de comunicación			
Supervisión Ambiental de Obra	\$1,232,000		
Licitación y contratación equipo de Supervisión Ambiental			
Recorridos de campo, revisión de obras			
Contratación y ejecución consultoría en supervisión y fiscalización ambiental para SNC	\$195,000		
Fiscalización Ambiental	\$1,111,450		

### Plan de Adquisiciones

Descripción	Nº Lic.	Monto (US\$)	P.E. Meses	Financiamiento			Contratante	Licitación Pública	
				BID	FND	Local		Época	
<b>Adquisiciones de Bienes o Servicios</b>									
Programa Social y Gestión del Progr. de Rep. Pérdidas	3	520.000	16	84%		16%	SNC	1º sem. 2002	N
Programa Técnico a la Supervisión Ambiental	1	195.000	6	84%		16%	UEP	2º sem. 2002	N
Programa Socio-Ambiental	1	300.000	114	84%		16%	UEP	1º sem. 2002	Inte
Programa Financiera Externa	1	225.000	36	84%		16%	UEP	2º sem. 2002	Inte
Programa Financiera Externa	1	180.000	36	84%		16%	UEP	2º sem. 2005	N
Programa Financiera Externa	1	157.500	42	84%		16%	UEP	2º sem. 2008	N
Programa Catastro y Registro de Tierras – Políg. 1	1	1.800.000	15	84%		16%	INRA	1º sem. 2002	Inte
Programa Catastro y Registro de Tierras – Políg. 2	1	2.200.000	15		100%		INRA	1º sem. 2002	Inte
Programa Capacit. en gestión territorial-amb.	1	545.000	28		100%		UEP	2º sem. 2002	Inte
Programa Demostrativos – Peq. Product. no-mecanizados	1	695.000	41	84%		16%	FDTA-TH	2º sem. 2002	Inte
Programa Demostrativos – Ganadería	1	375.000	12	84%		16%	FDTA-TH	1º sem.2003	Inte
Programa Demostrativos – Manejo de suelos, fertilizantes	1	410.000	18	84%		16%	FDTA-TH	1º sem.2003	Inte
Programa Hábitat Urbano	1	170.000	12		100%		UEP	1º sem.2003	N
Programa Iniciativa global para el desarrollo regional	1	170.000	11	84%		16%	UEP	1º sem.2004	N
Programa Construcción de viviendas	1	260.000	5	84%		16%	SNC	2º sem. 2002	N
Programa Construcción de pequeñas obras en comunidades	1	1.460.000	6	84%		16%	SNC	2º sem. 2002	N
	<b>18</b>	<b>9.665.000</b>	<b>----</b>				<b>----</b>		

P.E. Período de Ejecución, en meses.

Nota: La Tabla contiene todas las adquisiciones significativas previstas en el Proyecto.